

REF.: APRUEBA CONVENIO CON INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO "PRM – IDECO ALGARROBO" A EJECUTARSE EN LA REGIÓN METROPOLITANA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 02550/2025

METROPOLITANA, jueves, 27 de noviembre de 2025

VISTO:

Lo dispuesto en la ley N°21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica; la ley N°20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados; la ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia; la ley N°21.722, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025; la ley N°19.862, que establece Registros de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos; en el decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo N°19, de 2021 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Hacienda, que aprobó el reglamento de la ley N°20.032, que aprueba el reglamento de la ley N°20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; en el decreto supremo N°375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la ley N°19.862; en las resoluciones exentas N°s.092 y 346, ambas de 2025, y en la resolución N°RA215067/50/2023, de fecha 20 de enero de 2023, que nombra en cargo de alta Dirección Pública a la Directora de la dirección Regional Metropolitana; Resolución Exenta N°615067/239/2023, de 30 de enero de 2023, Resolución Exenta N°RA215067/141/2025, de fecha 14 de febrero de 2025 que establece orden de subrogancia de la Directora Regional Metropolitana, todas de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; en las resoluciones exentas N°s 206, N° 370, N° 555 y N° 635, todas de 2025 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; en el dictamen N° E151592/2025, de fecha 05 de septiembre de 2025 de la Contraloría General de la República; en la resolución N°36, de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, modificada y complementada por la resolución N°8, de 2025, ambas de la Contraloría General de la República y en la resolución N° 13, de 30 de julio de 2025, de la Contraloría General de la República que exime temporalmente del trámite de toma de razón los actos administrativos que se indican, y establece controles de reemplazo; y

CONSIDERANDO:

1° Que, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo objeto es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Lo anterior, se realizará asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad.

2° Que, las disposiciones de la ley N°20.032 tienen por objeto establecer la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se relacionará con sus colaboradores acreditados. Asimismo, determinan la forma en que el Servicio velará para que la acción desarrollada por esos colaboradores respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y se ajuste a lo dispuesto en esa ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan.

3° Que, la ley antes citada dispone que los aportes financieros para los programas de protección especializada que realicen los colaboradores acreditados relativos a las líneas de acción contempladas en el artículo 3° de la misma, sólo se podrán transferir como resultado de un concurso de proyectos, sin perjuicio de la facultad del Servicio para establecer un convenio en forma directa.

4° Que, a través de la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025 de esta Dirección Nacional, este Servicio aprobó las bases administrativas, técnicas y sus anexos correspondientes, y llamó al Cuarto Concurso Público de Proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave; programa de intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la integración a familia alternativa a la de origen; y programa especializado en explotación sexual comercial infantil y adolescente, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

5° Que, evaluadas las propuestas presentadas y en conformidad con lo dispuesto en el numeral décimo de las bases administrativas, que rigieron este proceso concursal, se adjudicó, mediante resolución exenta N°635, de fecha 19 de junio de 2025, no obstante, dicho acto administrativo fue dejado sin efecto y, en consecuencia, se readjudicó mediante la Resolución Exenta N° 878, de fecha 12 de agosto de 2025 el código del listado de proyectos de este concurso correspondiente al **N°1939** al colaborador acreditado **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**.

6° Que, dicho colaborador acreditado se encuentra inscrito en el Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dando cumplimiento a la ley N°19.862 y su Reglamento, contenido en el decreto supremo N°375, de 2003, del Ministerio de Hacienda y a la ley N°20.032.

7° Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las etapas y exigencias previstas para la ejecución del proyecto adjudicado, el colaborador acreditado y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, han acordado celebrar el convenio que se autoriza a través de la presente resolución.

RESUELVO:

1° **APRUEBESE** El convenio relativo al proyecto denominado “**PRM – IDECO ALGARROBO**” suscrito con fecha 21 de noviembre de 2025, entre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Colaborador Acreditado **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**, cuyo texto es el siguiente:

En Santiago, a 21 de noviembre de 2025, comparecen **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**, en adelante el “**COLABORADOR ACREDITADO**”, RUT N°71.877.800-K, domiciliado en Primera Transversal N°2630, comuna de Maipú, Región Metropolitana, representado por don **RAFAEL DE PUJADAS LIRA**, cédula nacional de identidad N°15.318.566-2, del mismo domicilio, y el “**SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**”, en adelante “**MEJOR NIÑEZ**” o el “**SERVICIO**”, servicio público descentralizado, , dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, creado por la ley N°21.302, representado por su Directora Regional de la región Metropolitana, doña **MARCELA ALEJANDRA GAETE REYES** cédula nacional de identidad N.º12.292.208-1, ambos domiciliados en **avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, torre 7, piso 3**, comuna de **Santiago**, quienes acuerdan el siguiente convenio:

PRIMERA: Antecedentes.

Las partes declaran que este convenio es el resultado del concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave; programa de intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la integración a familia alternativa a la de origen; y programa especializado en explotación sexual comercial infantil y adolescente, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad con la ley N° 20.032, autorizado mediante la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, se adjudicó, mediante la resolución exenta N° 635, de fecha 19 de junio de 2025, no obstante, dicho acto administrativo fue dejado sin efecto y, en consecuencia, se readjudicó el código N°1939 mediante la Resolución Exenta N° 878, de fecha 12 de agosto de 2025, el proyecto denominado “**PRM – IDECO ALGARROBO**” de la línea de acción y programa mencionados, al colaborador acreditado **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**.

SEGUNDA: Objeto social.

El colaborador acreditado tiene por objeto social: Promover y recuperar las líneas de formación, organización y producción entre los pobladores del sector urbano. Para ello se especifica lo siguiente: A) En la línea de formación se desarrollará en los pobladores la participación, la integración social, la integración familiar, el desarrollo cultural. todo lo anterior a través de cursos, charlas diarias murales, boletines y contactos permanentes con los agentes externos que trabajan en el sector. B) En la línea de organización se desarrollará el interés por participar en las organizaciones vivas y organizaciones estatales, esta última se entiende referida a las juntas de vecinos, centros de madres, codecos y proyectos de autoconstrucción. C) En la línea de la integración social se desarrollaran todas las acciones necesarias que vinculen a los pobladores con la sociedad en su conjunto, comprendiéndose, entre otras, las personas naturales o jurídicas, grupos étnicos y demás entes intermedios y viceversa; D) En la línea de producción se desarrollaran en el sector, centros de producción comunitaria (c.p.c.) y pequeñas empresas autogestionadas aumentado la capacidad de ahorro y mejoramiento de los ingresos familiares.- para la implementación de estos objetivos ideco se hará la estructura interna necesaria, E) En la línea de capacitación laboral se desarrollaran todas las acciones necesarias para la ejercicio de servicios de la misma, todo lo anterior, apoyado por diferentes programas, concursos, charlas, seminarios, congresos, medios de comunicación, investigación, publicaciones, contacto con agentes comunitarios u otros y demás medios disponibles. F) En la línea de trabajo con infancia, adolescencia y juventud y/o familia se su buscar a" proteger y/o restituir derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, situándolo en el centro de nuestro actuar, garantizando su participación y/o la de sus familias, fortaleciendo su desarrolla integral, reparando y resignificando el daño, previniendo de manera oportuna nuevas vulneraciones. para lo anterior disponer de equipo técnicos de excelencia y programas especializados de acuerdo con sus necesidades, buscando la permanente coordinación con el interceptor y con quien corresponda, convocando a la sociedad toda.

TERCERA: Sujeción a normas.

El colaborador acreditado, en este acto, declara conocer, entender y estar conforme con las menciones a los cuerpos legales a que se hace referencia en este convenio, en especial a las leyes N°s 21.722, 21.302 y 20.032 y a lo dispuesto en el decreto supremo N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez.

Las partes dejan expresa constancia que se regirán por la normativa anteriormente señalada, lo dispuesto en las bases administrativas, técnicas y anexos del cuarto concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave; programa de intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la integración a familia alternativa a la de origen; y programa especializado en explotación sexual comercial infantil y adolescente, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, autorizado mediante la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025, de la Dirección Nacional del Servicio, así como, en las consultas, respuestas y aclaraciones del certamen - en la medida que no resulten contrarias a las bases de licitación y sus anexos - y en toda otra normativa que le sea aplicable según la naturaleza del presente convenio.

Por otra parte, respecto del uso de los recursos transferidos a los colaboradores acreditados de naturaleza privada, resultarán aplicables las normas contempladas en los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; en todo lo pertinente en cada caso; así como las normas de transparencia y probidad establecidas en la Constitución Política de la República de Chile. Cabe destacar que el Estado de Chile ha adscrito a estándares y directrices internacionales que habrán de tenerse presentes para esos efectos, tales como los relativos a ciberseguridad, los establecidos en la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos- OEA- sobre acceso a la información y especialmente en las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidados de Niños, Resolución 64/142 de la Organización de las Naciones Unidas- ONU-.

CUARTA: Individualización del proyecto.

Del colaborador dependerá el proyecto denominado “PRM – IDECO ALGARROBO”, cuya sede estará ubicada en Calle Verona N°1458, Villa Italia, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, que será supervisado por la Dirección Regional Metropolitana.

El objetivo general del referido proyecto es: Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito y/o agresión sexual infantil

El proyecto presentado por el colaborador acreditado se encuentra contenido en el Anexo N°2 “Formulario de presentación de proyectos”, de las bases de licitación del Cuarto Concurso Público de proyectos, y se adjunta al presente convenio.

El proyecto presentado por el colaborador acreditado formará parte integrante del convenio.

El Resumen Ejecutivo del proyecto es el siguiente:

Los objetivos específicos del referido proyecto son los siguientes:

- Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso, constitutivo de delito, mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal del niño, niña o adolescente y facilitar el acceso a la red de justicia.
- Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y el adulto responsable.
- Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o adolescente víctima de maltrato y abusos.

Los resultados esperados del referido proyecto y las actividades específicas a desarrollar son los siguientes:

ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO ESPECÍFICO N°1	ETAPA DE INTERVENCIÓN	MEDIOS DE PRUEBA	CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO
“Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal del niño/a y facilitar el acceso a la red de justicia”			
1.- Sesión de entrevista de pre-calificación con énfasis en conocer la situación de abuso y/o maltrato con perspectiva socio jurídica con familia y adulto significativo, orientada a despejar la situación proteccional actual del NNA relevando factores protectores y de riesgo, en consideración al resguardo de su interés superior.	Evaluación de ingreso	Ficha de pre-calificación • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual Informativo de ingreso • Oficio de ingreso efectivo	Aporta a la profundización respecto de la situación actual, vislumbrando elementos significativos para pensar el proceso de intervención

2.- Sesión de acogida con el NNA y su familia y/o adulto significativo, considerando la experiencia de maltrato y/o abuso vivenciado por el NNA, y en concordancia a la etapa del ciclo vital del NNA y su familia	Evaluación de ingreso	Ficha de pre-calificación • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Informativo de ingreso • Material audiovisual para la presentación del modelo de atención • Autorización de uso de imagen • Informativo Modelo de Prevención del Delito IDECO.	Esta actividad contribuye al logro del objetivo, mediante el acceso oportuno a la protección y justicia para el NNA, mediante la difusión acerca de la existencia de mecanismos judiciales disponibles para abordar su situación legal. En esta instancia, se entregará información clara y comprensible sobre los procesos y herramientas socio jurídicas disponibles, con el objetivo de garantizar la interrupción efectiva de las situaciones de vulneración y facilitar la vinculación del NNA y su familia con la red de justicia, promoviendo así la restitución de sus derechos desde el inicio del proceso reparatorio
3.- Visita domiciliaria con fines de profundización diagnóstica en relación con las condiciones socioeconómicas con una perspectiva familiar relacional y socio contextual con pertinencia cultural	Evaluación de ingreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye a conocer el contexto real del espacio cotidiano de desarrollo del NNA, pudiendo relevar en terreno factores de protección y de riesgo asociados a las situaciones de vulneración
4.- Elaboración de informe diagnóstico y estados de avance, con énfasis en la identificación de condiciones de protección, seguridad y factores de riesgo, considerando el pronóstico del caso y las posibilidades de intervención. Este análisis se realizará en función de las necesidades particulares y específicas de cada NNA, permitiendo orientar los ajustes necesarios en el proceso reparatorio	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Insumos de profundización diagnóstica • Registro de evacuación de informe a Juzgado de Familia.	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, ya que permite identificar, mediante los informes, las condiciones actuales de protección, seguridad y riesgo que enfrenta el NNA. A partir de este análisis, se puede fundamentar técnica y jurídicamente la necesidad de activar mecanismos judiciales adecuados para resolver su situación legal. Asimismo, el informe orienta la articulación con la red de justicia, facilitando el acceso a medidas cautelares, de ser necesarias, que garanticen la interrupción efectiva de la vulneración y el restablecimiento de sus derechos.
5.- Sesiones de intervención en crisis con NNA y su familia y/o adulto relacionado, a fin de visualizar situaciones de riesgo que afecten de manera inminente a la protección y seguridad del NNA y la activación de mecanismos judiciales que permitan la visualización de los hechos, garantizando el acceso oportuno a las garantías del Estado	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Las sesiones de intervención en crisis con el NNA y su familia y/o adulto significativo contribuyen directamente al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, ya que permiten identificar y abordar de forma inmediata situaciones de riesgo que amenacen la protección y seguridad del NNA. A través de estas sesiones, se recogen antecedentes relevantes que sustentan la activación oportuna de mecanismos judiciales, favoreciendo la visibilización de los hechos y facilitando el acceso efectivo a las garantías y recursos del Estado, en el marco de la red de justicia.
6.-Activación de procedimiento de Resolución Exenta N° 155, a propósito de develación y/o despeje de nuevas situaciones de vulneración de derechos que sean parte de la causal de ingreso	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • activación de procedimiento • Denuncia en Fiscalía • Oficio a Juzgado de familia • Apertura de Registro único de caso en SIS	Esta acción contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al permitir la derivación inmediata a la autoridad competente, facilitando la activación de los mecanismos judiciales necesarios para abordar la situación legal del niño o niña y garantizar su acceso oportuno a la red de justicia y protección de parte de los organismos judiciales
7.- Revisión y análisis de los antecedentes sociojurídicos del caso, incorporando los enfoques transversales (derechos, género, curso de vida, interculturalidad, inclusión, entre otros) y las características particulares de la situación de vulneración, así como del NNA y su grupo familiar.	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye a interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al generar insumos técnicos necesarios para la activación fundamentada de mecanismos judiciales, permitiendo resolver la situación legal del niño o niña y facilitar su acceso efectivo a la red de justicia.

8.- Acciones de coordinación con curaduría ad-litem y redes institucionales judiciales, a fin de garantizar la movilidad y respuesta oportuna en términos de recursos jurídicos de protección	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al facilitar la activación de mecanismos judiciales adecuados para resolver la situación legal del NNA y asegurar su acceso efectivo a la red de justicia, resguardando así su integridad y derechos fundamentales.
9.- Acciones de intervención socio jurídicas proteccionales, mediante la participación activa del abogado del programa y profesionales intervinientes a través de la entrega de antecedentes ante órganos competentes y participación efectiva en procedimiento judiciales (juicios, audiencias, entre otros). Representación del interés superior, dando cuenta y en consideración de la opinión manifiesta del NNA.	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Informes remitidos • Copias de actas de audiencia y resoluciones recepcionadas.	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al permitir la activación efectiva de mecanismos judiciales que resuelvan la situación legal del NNA, representando su interés superior e incorporando su opinión manifiesta, conforme a su edad y madurez, en todas las instancias del proceso judicial.
10.- Reunión de análisis de caso entre los integrantes del equipo, pudiendo incorporar otros actores, tales como supervisores técnicos y coordinadores.	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Pautas de análisis de caso	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al generar un análisis técnico interdisciplinario que permite fundamentar la activación de mecanismos judiciales adecuados, resolver la situación legal del NNA y facilitar su acceso oportuno y pertinente a la red de justicia

ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO ESPECÍFICO N°2	ETAPA DE INTERVENCIÓN	MEDIOS DE PRUEBA	CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO
"Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y adulto/a responsable."			
1.-Sesiones de entrevista clínica con el NNA con fines de profundización diagnóstica, orientadas a pesquisar y analizar indicadores de daño, dinámicas traumatógenicas, comprensión subjetiva de las experiencias vividas, estrategias de afrontamiento y construcción de narrativas personales. Estas sesiones permiten relevar elementos clave que permitirán una comprensión de las experiencias de maltrato y/o abuso de la que fue víctima.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye a favorecer la resignificación del maltrato o abuso, al permitir que el NNA exprese y elabore su experiencia en un espacio seguro. A través de la entrevista clínica, se identifican indicadores de daño, recursos de afrontamiento y significados personales. Esto facilita la construcción de un relato reparador y promueve el inicio del proceso reparatorio junto a su adulto/a responsable
2.- Sesiones de entrevistas clínicas con familia y/o adulto significativo con fines de profundización diagnósticas respecto de las condiciones familiares para identificar la expresión del daño, significaciones y construcciones de la narrativa de la experiencia.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye a favorecer el proceso de resignificación, al permitir que el adulto/a responsable integre una mirada reflexiva del daño, fortaleciendo su rol protector y su participación activa en el proceso reparatorio del NNA.
3.-Aplicación de instrumentos de evaluación al NNA basado en la evidencia y atinentes a la situación que origina el ingreso a fin de despejar y propender a la resignificación y comprensión de la experiencia. (Escala: Escala de resiliencia 14 ítems, Inventario de fortalezas y virtudes para niños y niñas, entre otros. Test proyectivos: CAT-A, CAT-H, TRO Graficas la Familia, HTP, PBLL, caja de arena, juego simbólico) *Las técnicas se definen en virtud de las necesidades y características de cada caso.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Diagnóstico Individual • Tabulación y protocolos de instrumentos	Contribuye directamente a favorecer el proceso de resignificación, al permitir una comprensión profunda de la experiencia vivida y orientar acciones reparatorias que integren al NNA y a su adulto/a responsable en la construcción de un nuevo significado, más seguro y protector.

4.-Aplicación de instrumentos de evaluación a familia y/o adulto significativo basado en la evidencia y atinentes a la situación que origina el ingreso, a fin de despejar y propender a la resignificación y comprensión de la experiencia. (Genograma, ecomapa, visita domiciliaria, batería diagnóstica sociofamiliar) *Las técnicas se definen en virtud de las necesidades de cada caso.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual • Diagnóstico Sociofamiliar	Esto contribuye a favorecer el proceso de resignificación del maltrato o abuso, promoviendo una mirada reflexiva de la experiencia vivida, el fortalecimiento del rol protector y la reconstrucción de vínculos significativos desde una perspectiva reparadora.
5.-Sesión de co-construcción del PII con el NNA y su familia y/o adulto relacionado, en función de propender a la resignificación de las experiencias de maltrato y/o abuso sexual, considerando e incorporando el interés superior del NNA, así como su opinión manifiesta y todo lo relativo a enfoques transversales.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al logro del proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el NNA y adulto/a responsable"
6.-Acciones de diseño de PII (considera actualización que considere los recursos de cuidado, interés superior del NNA, y factores resilientes considerando el enfoque de derechos humanos. *Las actualizaciones se realizarán cada 6 meses posterior al término de la etapa de evaluación de ingreso y/o cada vez que exista un cambio significativo en la vida del NNA.	Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual • PII	Esta actividad contribuye directamente al proceso de resignificación, ya que orienta una intervención coherente con su historia, promueve su participación activa y la de su adulto/a responsable, y favorece la construcción de nuevas experiencias vinculares seguras que reparan el daño vivido.
7.-Elaboración y envío de informes diagnósticos y de estados del avance, integrando indicadores de daño, condiciones actuales, pronósticos, así como avances y retrocesos del proceso interventivo. Todo ello será desarrollado bajo los principios del enfoque de derechos y en resguardo del interés superior del NNA, asegurando que la información técnica oriente decisiones protectoras y ajustadas a sus necesidades particulares.	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual • Insumos de profundización diagnóstica • Registro de evacuación de informe a Juzgado de Familia.	Esta actividad contribuye al logro de favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y su adulto/a responsable, ya que permite visibilizar y sistematizar, de manera técnica y comprensible, los efectos del daño, los avances del proceso reparatorio y las condiciones de protección actuales
8.- Sesión psicoterapéutica individuales con el NNA, con el objetivo de promover la integración adaptativa de la experiencia, reducir la sintomatología asociada, y favorecer la construcción de una identidad resiliente, en la que el trauma no define el desarrollo del NNA. Mediante técnicas como bandeja de arena, rituales, celebración, hora de juego terapéutico, arteterapia, técnicas narrativas, cuentos, diarios, mapa de las emociones). Es dable señalar que las técnicas se definirán en concordancia con las necesidades de cada NNA.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro mediante el abordaje de los indicadores de daño, tendiendo a la resignificación de las experiencias.
9.- Sesiones con familia y/o adulto significativo, facilitando los procesos de interrupción de la situación de maltrato y/o abuso, favoreciendo la resignificación de esa experiencia y el fortalecimiento de recursos familiares y sociales que sustentan el bienestar integral del NNA	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al logro de favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y su adulto/a responsable, ya que las sesiones con la familia y/o adulto significativo permiten abordar las dinámicas que dieron origen a la vulneración, promoviendo su comprensión y transformación desde una mirada protectoras.
10.-Sesiones en grupo que permiten a los NNA compartir experiencias, generar redes de apoyo y facilitar procesos de elaboración del trauma, favoreciendo la individuación y diferenciación, ya que la interrelación con otros permite a cada participante reconocerse con mayor claridad.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro, toda vez que promueve la elaboración del trauma, fortalece la identidad, y permite resignificar lo vivido desde una perspectiva colectiva y reparadora, facilitando además la construcción de vínculos protectores y redes de apoyo significativas

11.- Sesión familiar con componente vincular en función de observar, intervenir y resignificar el vínculo entre el NNA y sus figuras significativas, promoviendo relaciones más protectoras, empáticas y coherentes con las necesidades del NNA.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Se contribuye al logro debido a que facilita la construcción de nuevas experiencias relacionales basadas en la protección, la empatía y la contención emocional, lo que posibilita reparar el daño vincular, generar confianza y promover relaciones coherentes con las necesidades emocionales del NNA en su proceso reparatorio.
12.- Sesiones de intervención en crisis con NNA y su familia y/o adulto relacionado, asegurando la contención y estabilidad psicoafectiva en momentos críticos, con la inclusión de sus familias y/o adultos significativos en el proceso de intervención.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro, considerando que la intervención en crisis permite contener emocionalmente al NNA en momentos de alta vulnerabilidad, resguardando su estabilidad psicoafectiva. Al integrar a la familia o adulto significativo en estos espacios, se fortalece el rol protector, se refuerzan los vínculos seguros y se crean condiciones emocionales que facilitan la elaboración del daño vivido,
13.- Gestión de redes, orientadas a fortalecer la articulación entre los diversos actores del sistema de protección, educación, salud y justicia con el propósito de garantizar una respuesta integral y efectiva para la reparación del daño y la protección de los NNA que propenda a la reducción de los indicadores de daño asociadas a las dinámicas abusivas y/o de maltrata que fueron víctimas	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro, considerando que la gestión de redes permite articular una respuesta interinstitucional coordinada y coherente, que asegura el acceso oportuno a prestaciones de protección, salud, educación y justicia. Esta articulación fortalece los factores protectores del entorno, disminuye la exposición a nuevas vulneraciones, y crea condiciones más estables y reparadoras.
14.- Visitas domiciliarias considerando estrategias psico/socio educativas a fin de que contribuyan a la disminución y reparación de los indicadores de daño, asociado a las situaciones de vulneración que afectaron al NNA.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuyen al logro, ya que las visitas domiciliarias, permiten intervenir directamente en el contexto cotidiano del NNA, favorecen la identificación y modificación de prácticas de riesgo, el fortalecimiento del rol protector del adulto responsable y la generación de condiciones más seguras y reparadoras en el entorno familiar.
15.- Reunión de análisis de caso entre los integrantes del equipo, pudiendo incorporar otros actores, tales como supervisores técnicos del SPE, y coordinadores de la institución.	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Pautas de análisis de caso	Esta actividad contribuye, ya que permite al equipo interventivo generar una comprensión compartida, profunda y especializada de la situación del NNA, integrando diversas miradas profesionales. La participación de supervisores y coordinadores fortalece la toma de decisiones clínicas y estratégicas, asegurando que la intervención sea coherente, contextualizada y ajustada a las necesidades del NNA, lo que favorece un proceso reparatorio más significativo y sostenido en el tiempo.

ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO ESPECÍFICO N°3	ETAPA DE INTERVENCIÓN	MEDIOS DE PRUEBA	CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO
"Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o adolescente, víctima de maltrato y abusos."			
1.- Sesiones de Entrevistas clínicas con familia y/o adulto significativo, orientadas a profundizar en las condiciones familiares, identificando pautas de crianza, dinámicas relacionales y competencias parentales, en relación con la experiencia de vulneración del NNA y su impacto en la vida cotidiana.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al logro, ya que permite identificar y analizar las dinámicas familiares, competencias parentales y pautas de crianza asociadas a la experiencia de vulneración. A partir de esta comprensión, es posible diseñar intervenciones focalizadas que promuevan el fortalecimiento del entorno protector, favoreciendo un acompañamiento más efectivo y sostenido del NNA en su proceso reparatorio

2.-Visita domiciliaria con fines de profundización diagnóstica orientadas a pesquisar las condiciones familiares, identificando pautas de crianza, dinámicas relacionales y competencias parentales, en relación con la experiencia de vulneración del NNA y su impacto en la vida cotidiana	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al logro, ya que permite constatar en terreno y analizar las dinámicas familiares, competencias parentales y pautas de crianza asociadas a la experiencia de vulneración. A partir de esta comprensión, es posible diseñar intervenciones focalizadas que promuevan el fortalecimiento del entorno protector, favoreciendo un acompañamiento más efectivo y sostenido del NNA en su proceso reparatorio
3.-Aplicación de instrumentos de evaluación a familia y/o adulto significativo basado en la evidencia y atinentes a la situación que origina el ingreso, a fin de despejar y evaluar las relaciones familiares y vínculos afectivos (Genograma, ecomapa, visita domiciliaria, NCFAS G+R, PMF, PSI-SF, E2P, video feedback). Es dable señalar que las técnicas se definirán en concordancia con las necesidades de cada NNA.	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Diagnóstico Sociofamiliar	Esta actividad contribuye al logro, dado que permite evaluar en profundidad las relaciones familiares, los vínculos afectivos y las condiciones del entorno. Esta información facilita la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de intervención, orientando acciones terapéuticas que promuevan un entorno protector y reparador para el NNA.
4.-Elaboración y envío de informes diagnósticos y de estados del avance, integrando indicadores del plan de Tratamiento o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Insumos de profundización diagnóstica • Registro de evacuación de informe a Juzgado de Familia.	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que los informes diagnósticos y de avance permiten monitorear el impacto del proceso interventivo, especialmente en los vínculos familiares y condiciones de seguridad, orientando decisiones que promuevan el bienestar y protección del NNA
5.-Acciones de diseño de PII (considera actualización*que considere los recursos de cuidado, interés superior del NNA, y factores protectores mediante el ejercicio de la parentalidad y condiciones sociales. *Las actualizaciones serán cada 6 meses posterior al término de la etapa de evaluación de ingreso y/o cada vez que exista un cambio significativo en la vida del NNA	• Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII	SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual • PII	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, al diseñar o actualizar el PII incorporando factores protectores, recursos de cuidado y ejercicio de la parentalidad, en concordancia con el interés superior del NNA, favoreciendo su bienestar psicológico y social.
6.- Sesión familiar a fin de fortalecer y desarrollar pautas relacionales protectoras a partir de los recursos familiares, promoviendo relaciones más protectoras, empáticas y coherentes con las necesidades del NNA. Mediante técnicas como, cartas terapéuticas, técnicas de interacción guiada, técnicas basadas en la mentalización, entre otras. *Las técnicas se definen en virtud de las necesidades de cada caso.	• Ejecución del plan Seguimiento • Egreso	•SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad fortalece los recursos familiares y sociales, al promover vínculos protectores y competencias parentales, mediante técnicas terapéuticas que favorecen relaciones empáticas y coherentes con las necesidades del NNA, contribuyendo así a su bienestar psicológico y social.
7.-Sesiones socioeducativas con familia y/o adultos significativos, orientado a que desarrollen y fortalezcan sus competencias parentales a partir de los recursos familiares a fin de promover el bienestar psicológico y social del NNA.	• Ejecución del plan Seguimiento • Egreso	•SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad de realizar sesiones socioeducativas, contribuye a promover el fortalecimiento de las competencias parentales, basándose en los recursos familiares disponibles. Esto permite generar entornos más protectores y conscientes, que favorecen directamente el bienestar psicológico y social del NNA.
8.- Acciones de gestión con redes comunitarias e institucionales a fin de que se contribuyan al fortalecimiento de las pautas relacionales protectoras a partir de las competencias de los adultos significativos, a través de los accesos a la oferta y recursos	• Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que la gestión con redes comunitarias e institucionales permite ampliar el acceso a apoyos y servicios, reforzando las competencias de los adultos significativos y favoreciendo pautas relacionales protectoras, lo que impacta positivamente en el bienestar psicológico y social del NNA.

9.- Visitas domiciliarias mediante uso de estrategias educativas a partir de los recursos familiares, promoviendo relaciones más protectoras, empáticas y coherentes con las necesidades del NNA. Utilizando técnicas de reconocimiento, validación, mapa de redes, genograma, acuario familiar, rituales, espacios de arte terapia. Es dable señalar que las técnicas se definirán en concordancia con las necesidades del caso.	• Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que las visitas domiciliarias permiten intervenir en el entorno natural del NNA, promoviendo vínculos protectores y empáticos
10.- Reunión de análisis de caso entre los integrantes del equipo, pudiendo incorporar otros actores, tales como supervisores técnicos del SPE, y coordinadores de la institución.	• Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso de caso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Pautas de análisis de caso	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que la reunión de análisis de caso permite integrar diversas miradas profesionales para comprender de forma más profunda la dinámica familiar y los factores de riesgo y protección. Esto favorece la definición de estrategias ajustadas al contexto del NNA, orientadas a fortalecer su entorno familiar y promover su bienestar psicológico y social.

El mecanismo que el Servicio y el colaborador acreditado empleará para evaluar su cumplimiento consistirá en la realización de la evaluación del proyecto.

QUINTA: Beneficiarios.

Los beneficiarios serán aquellos indicados en las respectivas bases técnicas correspondiente a la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave (PRM), en el proyecto aprobado por el Servicio y en el Anexo N° 1 denominado “Plazas a licitar y focalización territorial” del cuarto concurso público de proyectos, cuya convocatoria fue autorizada por la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que indica lo siguiente:

REGIÓN	CÓDIGO LICITACIÓN	LINEA DE ACCIÓN	MODALIDAD	MODELO	COMUNA BASE PREFERENTE	FOCALIZACIÓN	COBERTURA
METROPOLITANA DE SANTIAGO	1939	INTERVENCIONES AMBULATORIAS DE REPARACIÓN	PRM – PROGRAMA ESPECIALIZADO EN MALTRATO	PRM	CERRO NAVIA	RENCA – CERRO NAVIA	100
EDAD	SEXO	FACTOR ZONA	COSTO NIÑO MES	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	MONTO PERIODO A LICITAR	PERIODO A LICITAR
0 A 17 AÑOS, 11 MESES, 29 DÍAS	A	0%	\$212.074	\$21.207.382	\$254.488.582	\$763.465.746	3 AÑOS

La atención se prestará bajo la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave y el Servicio atenderá en el programa **100 plazas**.

SEXTA: Monto, forma y requisitos para el pago.

El monto total del presente convenio asciende a la suma de **\$763.465.746-**, conforme al valor establecido en el certificado emitido por el Departamento de Gestión Financiera de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional del Servicio. Dicho valor se actualizará de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.

Los aportes financieros otorgados por este Servicio se determinarán de acuerdo a lo señalado en los artículos 29 y 30 de la ley N°20.032 y su reglamento, contenido en el decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez. El aporte financiero del Estado se expresa en Unidades de Fomento y será calculado y se actualizará considerando el valor que dicha unidad registre al 1 de enero del año correspondiente.

Para el año 2025 el valor de la Unidad de Fomento al 1 de enero corresponde a \$38.419,17.

Para el cálculo del valor efectivo de los aportes financieros del Estado de la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, modelo de intervención Programas de Protección Especializada, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:

$$\text{Aporte financiero} = \# \text{NNA Atendidos} * \text{Valor Base} * (1 + \sum \text{Factores del criterio})$$

Por “NNA atendidos”, se entenderá a los niños, niñas y adolescentes atendidos en el mes, los que no podrán superar las plazas convenidas. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley N° 21.302, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

Para el cálculo del valor de los aportes financieros del Estado a transferir a los colaboradores que desarrollen programas de protección especializada se considerarán los siguientes valores y criterios:

Programas	Valor Base UF Mensual	Criterio
Programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave	5,52	Lugar

Tablas: criterios, categorías y factores:

Categoría para asignación del criterio lugar: este criterio está referido a la ubicación donde se desarrollará el respectivo proyecto, de acuerdo al cuadro establecido en el artículo 10 del reglamento de la ley N° 20.032, aprobado por el decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez-.

En el Reglamento ya citado se encuentra el listado correspondiente a las regiones, provincias comunas o ciudades con las categorías correspondientes.

Los factores asociados a cada tipo de lugar serán los siguientes:

Categoría	Factor
Lugar A	0%
Lugar B	14%
Lugar C	28%
Lugar D	56%
Lugar E	84%
Lugar F	100%

Este criterio se aplicará todos los modelos de intervención de las líneas de acción. Este criterio incluye la disponibilidad y costos de los recursos humanos y materiales necesarios en la localidad en que se desarrollará el proyecto de conformidad a lo previsto en el número 3 del artículo 29 de la ley N° 20.032.

Los programas de esta línea de acción se pagarán por niño, niña y adolescente atendido en el mes, los que no podrán superar las plazas convenidas. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley 21.302, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N° 20.032, el colaborador acreditado deberá cumplir los siguientes requisitos para el pago:

a) Contar con un 75 por ciento del personal conformado por profesionales y/o técnicos especializados acordes a la respectiva línea programática, incluyendo a quienes trabajen en trato directo con los niños, niñas y adolescentes.

La especialización deberá acreditarse, ante el Servicio, mediante los respectivos títulos profesionales de grado y certificados de especialización o postgrado que lo avalen, con determinación específica y detallada del ámbito de su experticia. Tales antecedentes estarán disponibles para las autoridades competentes que los requieran.

b) Comparecer sus profesionales o peritos a declarar ante el tribunal a las audiencias a las que se les cite en razón de su cargo o experticia, eximiéndose de esta obligación sólo cuando el tribunal los libere de ella, lo que será debidamente acreditado con copia autorizada de la respectiva resolución judicial que así lo señale.

c) Cumplir las respectivas pericias o informes de seguimiento de avance de intervenciones con los estándares requeridos para tener valor probatorio. De no hacerlo, el tribunal deberá remitirlos al Director Nacional del Servicio, con copia al Director Regional correspondiente, a efectos de suspender los respectivos pagos al colaborador, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan, las cuales el juez sugerirá cuando se trate de una práctica frecuente del respectivo programa.

Si en la fiscalización a la que se refiere el artículo 39 de la ley N°21.302, se identifica el incumplimiento de alguna exigencia, el Servicio podrá retener el pago de los recursos a los que se refiere este artículo hasta en el 50 por ciento, hasta que el colaborador acreditado disponga de las medidas necesarias para cumplir con la exigencia no satisfecha. En tal caso, el Servicio deberá contar con planes de asesoría y mejoramiento para asegurar que el colaborador acreditado cumpla con las exigencias no satisfechas en la fiscalización.

El Servicio transferirá el monto de los aportes financieros del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la

ley, en forma mensual, y dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al mes de entrada en vigencia del convenio respectivo, siempre que el colaborador acreditado que ejecuta el proyecto haya informado las atenciones en los plazos establecidos por el Servicio, y así sucesivamente, a excepción de los proyectos de emergencia, que se regirán por lo establecido en los respectivos convenios.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá anticipar el monto del aporte financiero equivalente a un mes, sólo al inicio del proyecto previo requerimiento fundado del colaborador acreditado. En el caso de ser requerido, dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al colaborador acreditado, en un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 del D.S. N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez.

El monto de los aportes financieros del Estado se transferirá directamente a la cuenta corriente habilitada por el colaborador acreditado para la ejecución del respectivo proyecto, en conformidad a las obligaciones contenidas en los convenios suscritos con el Servicio y a los procedimientos específicos establecidos para las diferentes líneas de acción, los que se determinarán a través de la normativa técnica y administrativa impartida por este último.

El Servicio pagará mensualmente hasta la cobertura máxima establecida en los convenios. Una vez determinado el monto mensual a pagar por concepto de aportes financieros del Estado, el Servicio emitirá una liquidación de pago.

Para efectos del pago de un determinado proyecto, los colaboradores acreditados deberán informar los ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes, y la población atendida mensualmente. La entrega de la información deberá realizarse digitalmente.

Los destinatarios de los aportes financieros del Estado acreditarán mensualmente el monto de los aportes financieros del Estado percibidos mediante la emisión de un comprobante de ingreso, cuyo original deberá ser remitido a la Dirección Regional respectiva del Servicio.

No procederá el otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 18 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

SÉPTIMA: De las principales obligaciones del colaborador acreditado.

Durante la ejecución del proyecto, el colaborador se compromete a cumplir especialmente las siguientes obligaciones:

1. Atender a un niño, niña o adolescente, por derivación del Tribunal de Familia respectivo, que es el órgano judicial competente para conocer de las medidas proteccionales a que se refieren las letras c) y d) del artículo 71 y artículo 80 bis, ambos de la ley N° 19.968; y por derivación de Oficinas Locales de la Niñez respectivas (en la medida que dichos organismos se encuentren implementados). Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad del Director Regional del Servicio, para asignar cupos en proyectos de programas de Protección Especializada, conforme al artículo 19 de la Ley N°21.302.

Los ingresos por derivación del Ministerio Público o Fiscalía, sólo procederán en la medida que dicho organismo remita los antecedentes al Tribunal de Familia respectivo, a fin de que éste último dicte la resolución correspondiente, por cuanto, es el órgano judicial competente para conocer de las medidas proteccionales a que se refieren las letras c) y d) del artículo 71 y artículo 80 bis, ambos de la ley N° 19.968.

2. Los directores o responsables de los proyectos de protección especializada y los profesionales que de atención directa a los niños, niñas y adolescentes en alguna de las líneas de acción señaladas por la ley N°20.032, que tengan conocimiento de una situación de vulneración a los derechos de algunos de ellos, que fuere constitutiva de delito, deberán denunciar de inmediato esta situación a las autoridades competentes, según lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Procesal Penal. En estos casos, así como en aquellas situaciones que, no siendo constitutivas de delito, vulneren sus derechos, los directores o responsables de los proyectos respectivos deberán solicitar al tribunal competente la adopción de medidas de protección a favor del niño, niña o adolescente víctima, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ocurrencia del o los hechos respectivos.

El incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos precedentes, además de las sanciones penales que correspondan, constituyen una falta grave sancionada de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

Cualquier entorpecimiento o retardo injustificado que impida el libre acceso de los profesionales, públicos o privados, que ejerzan la defensa jurídica del niño, niña o adolescente, con el fin de tener, en cualquier momento, comunicación personal, directa y reservada con aquéllos, independientemente de que cuenten con mandato judicial expreso o actúen como agentes oficiosos, será sancionado como falta grave de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 referido precedentemente.

3. Efectuar una rigurosa selección de personal, mediante la aplicación de tests psicológicos y estudio de sus antecedentes personales y laborales, con el fin de asegurar la competencia para la función a desempeñar y de descartar características o patologías que puedan constituir riesgo para los beneficiarios o las beneficiarias atendidos. Asimismo, deberá ejecutar un riguroso proceso de inducción inicial a todo el personal en materias referidas al respeto estricto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

4. Velar porque las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes demuestren idoneidad para el trato con ellos y, en especial que no hayan sido condenadas, se encuentren actualmente procesadas, ni se haya formalizado una investigación en su contra por crimen o simple delito, que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos. Para tal efecto, será su obligación solicitar a los postulantes que

intervendrán en los proyectos, el certificado de antecedentes para fines especiales - con una antigüedad no superior a 30 días desde que comiencen a prestar atención a niños, niñas o adolescentes - a que se refiere el artículo 12 letra d) del decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, sobre prontuarios penales y certificados de antecedentes y a consultar al Registro previsto en el artículo 6° bis del decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro Nacional de Condenas, - al momento de la selección del personal y mantener con la debida periodicidad control sobre la mantención de esta circunstancia. Semestralmente, el organismo colaborador acreditado deberá consultar el registro previsto en el artículo 6 bis del decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, respecto de las personas que, en cualquier forma, les presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes.

Al efecto, deberá requerir a los interesados una declaración jurada simple que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos. Deberá solicitar antes de efectuar la contratación a las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes, información acerca de si el postulante se encuentra afecto a la inhabilitación prevista en el artículo 39 bis del Código Penal, consultando, a este respecto, la sección del Registro de Condenas denominada "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad" (artículo 39 bis del Código Penal). Asimismo, deberán solicitarles semestralmente, la presentación de un certificado de antecedentes para fines especiales, con el objeto de llevar, con la periodicidad de 6 meses, control sobre la mantención de las circunstancias descritas precedentemente. Con igual periodicidad, deberá requerir a los interesados, una declaración jurada simple, que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito, que por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos.

Asimismo, el colaborador no podrá contratar a personas que presten servicios en labores de atención o trato directo de niños, niñas y adolescentes en este proyecto, que tuvieren dependencia grave de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol. De conformidad con lo anterior, el colaborador deberá requerir a los interesados, una declaración jurada simple, en la que se exprese tal circunstancia, debiendo en caso de que esté sometido a tratamiento, acompañar la certificación médica correspondiente.

5. Destinar los aportes financieros que transfiere el Servicio, al cumplimiento de los fines de protección especializada, pudiendo destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo al cumplimiento de dichos fines.

La supervisión financiera y la fiscalización del gasto, se orientará a verificar el buen uso de los recursos transferidos.

6. Proporcionar la información técnica y financiera requerida por el Servicio, para la realización de la supervisión y fiscalización de las acciones relacionadas con los niños, niñas o adolescentes, conforme a la normativa que regula las acciones del Servicio en esta materia.

7. Rendir cuenta mensualmente, conforme a las normas e instrucciones sobre rendición de cuentas de fondos transferidos en virtud de la Ley N° 20.032, contenidas en dicha normativa, en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, y en las resoluciones exentas N°s.208, de 2022, y 264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o aquella que la modifique o reemplace, en todo lo que no se oponga a las disposiciones antes señalada.

El colaborador acreditado no podrá recibir nuevos aportes financieros del Estado mientras no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los montos transferidos, y deberá restituir los respectivos fondos cuando aquella no se ajuste a los objetivos de los proyectos, salvo lo dispuesto en el artículo 18 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

8. Conservar la documentación constitutiva de la rendición de cuentas en el mismo orden del registro de ingresos y egresos, y mantenerla permanentemente a disposición de los supervisores del Servicio, de la Subsecretaría de la Niñez y de la Contraloría General de la República.

9. Acreditar mensualmente el monto del aporte financiero percibido mediante la emisión de un comprobante de ingreso cuyo original deberá ser remitido a la Dirección Regional respectiva del Servicio. Los colaboradores acreditados estarán obligados a llevar un registro de ingresos y egresos de los montos de los aportes financieros recibidos e informar sobre la aplicación de los mismos. En el registro antes señalado se deberán consignar, en orden cronológico, el origen y monto detallado de los aportes financieros recibidos, el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que registren los pagos realizados cuando correspondan; y el saldo disponible. Asimismo, deberán remitir al Servicio un informe mensual, el que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados, el detalle de estos, y el saldo disponible para el mes siguiente. El Servicio determinará la forma y contenidos específicos del informe mensual.

El colaborador acreditado deberá presentar el informe mensual dentro de los primeros 5 días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, ante la Dirección Regional respectiva, a fin de dar cumplimiento a la obligación de presentar la rendición de cuentas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

10. Reintegrar a la cuenta corriente del proyecto, los aportes financieros del Estado en los casos en que el colaborador acreditado los destine a fines distintos a los contemplados en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, no cumpla con los objetivos del proyecto, no presente la documentación original de respaldo que acredite el gasto en la ejecución del proyecto o mantenga saldos no rendidos, observados y/o rechazados, respecto de los recursos transferidos para el respectivo proyecto. En el caso de que el colaborador acreditado se encuentre en la obligación

de restituir los aportes financieros del Estado, deberá efectuar el reintegro dentro del plazo máximo de 60 días hábiles contado desde el término del proyecto.

Por otra parte, en caso de que al término de un proyecto resultaren excedentes o saldos de aportes financieros no utilizados al término financiero de un proyecto, éstos deberán ser restituidos por el colaborador acreditado en una sola cuota durante el mes siguiente a la determinación de la existencia de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa N°04, Partida 21, Capítulo 11, Programa 01, del presupuesto identificado para este Servicio para el año 2025, en caso de que al término de un proyecto resultaren excedentes o saldos no utilizados, el colaborador acreditado podrá hacer uso de dichos fondos en otros proyectos bajo su administración, con el objeto de mejorar la calidad de la atención brindada a los niños, niñas y adolescentes en dichos proyectos. En caso de no ser utilizados dichos recursos en otros proyectos, deberán ser reintegrados al Servicio. El traspaso de fondos públicos entre proyectos de un mismo colaborador se realizará con la previa autorización del Jefe Superior del Servicio mediante resolución exenta y se informará bimensualmente a la Dirección de Presupuestos, detallando los montos traspasados por proyecto. Se excluyen de estos casos los fondos que hayan quedado excedentes derivados de la ejecución de proyectos de emergencia.

La facultad señalada en el párrafo precedente permanecerá vigente en la medida que se contemple en las leyes de presupuestos de cada año.

11. Hacer devolución de los bienes muebles que se adquirieron con los aportes financieros del Estado transferidos por el Servicio, para el cumplimiento del respectivo proyecto, al término de la ejecución de éste, a fin que el Servicio, conforme a criterios técnicos, resuelva sobre su posterior destinación.

Para estos efectos, deberá darse cumplimiento a la resolución exenta N°309, de 24 de marzo de 2023, de la Dirección Nacional de este Servicio, que aprueba el Instructivo de registro, control, traspaso y baja de bienes inventariables de los colaboradores acreditados, así como, cualquier modificación o nueva regulación en torno a estas materias y toda instrucción complementaria que en el Servicio se disponga.

12. Dejar claramente establecido que se trata de un proyecto financiado con aportes financieros del Estado transferidos por el Servicio, en todas las actividades que desarrolle e incorporar la imagen corporativa del Servicio en todo el material gráfico que edite, e incluir en los establecimientos o centros donde funciona el proyecto, la señalética que se describe en el "Manual de Normas Gráficas señalética de instituciones acreditadas", disponible en la página Web del Servicio con posibilidad de poner el nombre del proyecto "de fantasía".

13. Mantener publicada y actualizada en su respectivo sitio electrónico institucional, la información señalada en el artículo 15 de la ley N°20.032 y en el inciso penúltimo del artículo 25 de la ley N°21.722. Asimismo, deberá mantener actualizada la información prevista en la ley N°19.862, que establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y su Reglamento, contenido en el decreto supremo N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda.

14. Informar mensualmente de la atención brindada, para efectos del pago, según las orientaciones recibidas desde el Servicio.

15. Llevar un registro general, permanentemente actualizado, de las derivaciones realizadas, por un lado, por las Oficinas Locales de la Niñez y, por el otro, por los tribunales competentes; de la fecha de recepción de las derivaciones; de la o las personas responsables de asignar los casos a los profesionales competentes; de la fecha en que se realizó tal asignación y los profesionales asignados a cada caso; de la fecha de inicio de la atención al niño, niña o adolescente y a su familia; del número y fecha de las intervenciones realizadas y de las personas a quienes ellas estuvieron destinadas; del número de la carpeta del caso de cada niño, niña o adolescente atendido, la que deberá encontrarse siempre actualizada, y los demás contenidos que determine el reglamento respectivo. Este registro, así como la carpeta individual de los niños, niñas y adolescentes atendidos, será de libre acceso para los fiscalizadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la Dirección Nacional, las direcciones regionales y los supervisores y fiscalizadores del Servicio; para la Defensoría de los Derechos de la Niñez y para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los jueces de familia, los abogados patrocinantes de los niños, niñas y adolescentes y sus curadores ad litem, en las causas que tramiten respecto de los niños, niñas y adolescentes que representan, tendrán siempre acceso al registro y a las carpetas individuales antes mencionadas, pudiendo solicitar su envío al tribunal. Todas las personas que, de acuerdo con los incisos precedentes, accedan a la información en ellos referida, quedarán sujetos al deber de reserva y confidencialidad establecido en el inciso segundo del artículo 33 la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, sancionándose su infracción del modo prescrito en el inciso cuarto de dicha norma. En el caso de los jueces de familia, éstos se regirán de conformidad con las normas de reserva establecidas en el artículo 15 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia. El incumplimiento de los deberes de registro y actualización, así como cualquier entorpecimiento o retardo en el acceso a ellos a las personas que tienen derecho a ello, será sancionado como falta grave de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

16. Operar y mantener actualizada en forma permanente, según las instrucciones y condiciones de uso que imparta el Servicio sobre la materia, toda la información requerida por el Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo de Servicio previsto en la ley N°21.302, el cual estará disponible desde el momento de inicio de los proyectos, a través del sitio web sis.mejorninez.cl. El colaborador acreditado será responsable de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que proporcione. La información contenida en el referido sistema será de propiedad exclusiva del Servicio.

17. Cumplir las normas e instrucciones generales y particulares que imparta el Servicio, de conformidad a la normativa vigente. Asimismo, deberán proporcionar la información que el Servicio requiera, ajustándose y colaborando con su supervisión y fiscalización técnica y financiera.

El no cumplimiento de lo dispuesto dará lugar a las sanciones consagradas en el artículo 9 bis y 37 de la ley

18. Velar por el correcto uso de los aportes financieros, procurando que esta no sea objeto de gravamen, embargo, condición o cualquier otra limitación que afecte o limite su uso o destino, debiendo, en caso de decretarse embargo u otra limitación cualquiera sea su origen, informar dentro de las 48 horas siguientes a la Dirección Regional del lugar donde se ejecuta el proyecto afectado. En dicha situación, el Servicio evaluará técnica y financieramente la procedencia del gasto que originó la afectación de la subvención pudiendo exigir la restitución de los recursos, si de los antecedentes aparece que no se ha ajustado a los objetivos del proyecto.

19. Destinar los aportes financieros del Estado en los contratos de arrendamiento que celebre para la ejecución del proyecto respectivo, exclusivamente en aquellas prestaciones que, con arreglo a las normas contenidas en el Código Civil, sean de cargo del arrendatario, estas son las "reparaciones locativas", previstas en el artículo 1940 del citado cuerpo legal, salvo autorización previa del Servicio.

20. Dar cumplimiento a las observaciones emanadas del proceso de evaluación ex ante de la propuesta adjudicada, por parte de la Comisión de Evaluación, que serán debidamente informadas por la Dirección Regional de la Región respectiva; las que serán objeto de las respectivas supervisiones técnicas o financieras, según corresponda, que se practiquen en esta Dirección Regional; con el objeto de que este Servicio vele para que la acción desarrollada por sus colaboradores acreditados, respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y se ajuste a lo dispuesto en la ley Nº 20.032 y en las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan.

21. Dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución exenta Nº 155, de 2022, modificada por la resolución exenta Nº307, de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio, que aprueba procedimiento ante hechos eventualmente constitutivos de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran atendidos en colaboradores acreditados del Servicio nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga respecto a los flujos e información a entregar ante estos hechos

22. Asegurar, los derechos laborales y el cumplimiento de las normas laborales y previsionales, respecto de los trabajadores que laboran en el proyecto, en el marco de la relación contractual que mantienen.

23. Utilizar la información proporcionada por el Servicio, sólo para los efectos de dar cumplimiento a los fines propios de este convenio, quedando prohibido todo uso distinto del señalado. En dicho entendido, el colaborador acreditado, deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes o información que el Servicio le proporcione con motivo del presente convenio, no pudiendo hacer uso de éstos para fines ajenos al mismo, y en consecuencia, no podrá, a cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del convenio, como después de su término. Esta prohibición afecta al colaborador acreditado, al personal que labora en distintas calidades jurídicas, que se encuentre ligado al convenio, en todas sus etapas, incluso después de la expiración del mismo. El Servicio quedará liberado de toda responsabilidad por el uso indebido que el colaborador acreditado, pueda dar a la información, reservándose el derecho a ejercer todas las acciones legales tendientes a demandar el reembolso de las sumas a las que eventualmente sea obligado a pagar como consecuencia de lo anterior, más la indemnización de los perjuicios que se hubieren ocasionado.

24. Dar cumplimiento a la resolución exenta Nº 149, de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio, que aprueba el procedimiento ante el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio o por los colaboradores acreditados, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga respecto a los procedimientos e información a entregar ante este hecho.

25. Proporcionar, a requerimiento del Servicio, y dentro del plazo que se le fije para ello, todas las copias digitalizadas, o en caso que no fuere posible, de todas las fotocopias legibles de la información que debe ingresarse en el Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo de Mejor Niñez, disponible a través del sitio web www.sis.mejorninez.cl, tales como información del proyecto, de los niños, niñas y adolescentes atendidos, de la gestión comunitaria - intersectorial, del funcionamiento del proyecto y de los aspectos administrativos, financieros y contables del mismo, que le han sido requeridos a este Servicio, en el contexto de la tramitación de una solicitud de acceso a la información, regida por la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, debiendo proceder a entregar dichos antecedentes al funcionario dependiente de esta Institución, que lo requiera por cualquier medio idóneo. En el caso de que todo o parte de dicha documentación ya no exista en poder del organismo colaborador — por expurgación autorizada por la Contraloría General de la República o por otro motivo calificado—, deberá informar dicha circunstancia fundadamente y por escrito, dentro de mismo plazo a quien lo requirió. El Servicio deberá adoptar todas las medidas de resguardo respecto de los datos personales y sensibles que contenga dicha información, de conformidad a la normativa vigente, procediendo previamente a su entrega, al tarjado pertinente.

26. Todo directivo, profesional y persona que se desempeñe en organismos colaboradores deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular.

27. Velar por el trato digno evitando la discriminación y la estigmatización de los sujetos de atención y de su familia. Deberán recibir en todo momento y en todo medio el trato digno que corresponda a toda persona humana. Particular cuidado se deberá tener en las medidas, informes o resoluciones que produzcan efecto en las decisiones de separación familiar.

28. Informar y tener en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente respecto a los procesos de intervención que le atañen, en función de su edad y madurez.

29. Dar cumplimiento al procedimiento, aprobado a través de la resolución exenta Nº 619, de 2022, de este Servicio, o toda otra, que la modifique o la reemplace, que regula la forma de cumplir por parte de los colaboradores

acreditados con la obligación establecida en el artículo 15 de la ley N° 20.032 y el artículo 20 del decreto supremo N° 20, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el reglamento sobre normas para la operación y adecuado funcionamiento de los registros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

30. Dar cumplimiento a los estándares de los programas de las líneas de acción contempladas en el artículo 18 de la ley N° 21.302, los que consisten en las condiciones mínimas y comunes que deben ser consideradas por el Servicio en el diseño de la oferta programática de protección especializada, así como en las bases administrativas y técnicas de las convocatorias que efectúe el Servicio para la ejecución de los programas de protección especializada, y en las obligaciones de los convenios suscritos con los colaboradores acreditados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.032.

Dichos estándares se contienen en el decreto supremo N°5, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez- que aprobó el reglamento que fija estándares para los programas del Servicio, los que se aplicarán a través de las siguientes dimensiones:

- a) Enfoques transversales.
- b) Organización interna.
- c) Gestión del equipo ejecutor.
- d) Gestión de la información.
- e) Ámbito de intervención.
- f) Ambientes adecuados para la niñez y adolescencia.
- g) Ámbito de participación.
- h) Medios y protocolos de actuación ante situaciones especiales.

Los medios e indicadores específicos para verificar el cumplimiento de los estándares se regirán por lo establecido en dicho reglamento y conforme a lo previsto en la matriz para la determinación del cumplimiento de los estándares para la acreditación de colaboradores y para la ejecución de los programas de las líneas de acción del Servicio para el bienio 2022-2023, aprobada por resolución exenta N°18, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez o aquella que la modifique o reemplace.

En relación con el estándar “colaboración activa en la supervisión y asesoría”, los ejecutores deberán dar cuenta del cumplimiento de este estándar a través de informes periódicos que serán remitidos al Servicio, una vez al año en el mes de junio, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N°5, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez.

31. Imputar los pagos efectuados al fondo de cesantía, previsto en el artículo 13 de la ley N°19.728, (que estableció un seguro de desempleo o cesantía, en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo), efectuados con cargo a los aportes financieros que este Servicio le transfiere, a la indemnización por años de servicio que corresponde al trabajador desvinculado por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa. (Aplica Dictamen N°8.583, de 27 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República).

32. El colaborador acreditado deberá en su actuar, dar cumplimiento al principio de probidad en el ejercicio de las funciones que ejecuta. Todo directivo, profesional y persona que se desempeñe en la entidad colaboradora, deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, N°5, de la ley N°20.032.

OCTAVA: Del personal.

El personal que los colaboradores acreditados contraten para la ejecución de los proyectos no tendrá relación laboral alguna con el Servicio, sino que exclusivamente con dichos colaboradores, siendo responsabilidad de estos el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

El Servicio no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus trabajadores, sin perjuicio de la supervisión del gasto y de la calificación técnica de su personal comprometida en el respectivo proyecto.

El colaborador deberá informar a la Dirección Regional respectiva, cualquier modificación en la dotación y configuración de los equipos profesionales del proyecto, de tal forma que si el equipo ejecutor a cargo abandona o cesa sus funciones por cualquier causa, éstos deberán ser reemplazados por personal que cumpla con los mismos perfiles que el colaborador se comprometió en su formulario de presentación de proyectos y sus anexos, por lo tanto, a fin de salvaguardar la equivalencia curricular, deberá remitir los antecedentes del nuevo personal a contratar, pudiendo la Dirección Regional, objetarlo si no se ajusta al perfil comprometido por el colaborador, en el proyecto adjudicado y convenido.

Las personas jurídicas que se desempeñen como organismos colaboradores del Estado serán civilmente responsables por los daños, judicialmente determinados, que se hayan ocasionado a raíz de vulneraciones graves de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes causados tanto por hechos propios como de sus dependientes, salvo que pruebe haber empleado esmerada diligencia para evitarlas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil que por los mismos hechos pueda corresponderle a la persona natural que ejecutó los hechos.

Los trabajadores de los colaboradores acreditados deberán velar por el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 54 de la Ley N°21.302, esto es:

- 1.- El colaborador deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio

de sus funciones.

2.- El personal deberá actuar conforme a los objetivos y principios establecidos en la ley, y tratándose del personal de la Administración del Estado, su incumplimiento será considerado como infracción grave al principio de probidad administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, número 8, de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

3.- El personal que tenga trato directo con niños, niñas y adolescentes, deberá tener una salud mental y física comprobable compatible con el cargo, y las cualificaciones técnicas y/o profesionales necesarias para un correcto ejercicio del mismo. En razón de lo anterior, el personal deberá someterse cada dos años a una evaluación de salud física y mental.

NOVENA: Del término unilateral y modificaciones de convenio.

El Servicio estará facultado, según los artículos 37 de la ley N° 20.032 y 41 de la ley N° 21.302, para poner término anticipado al presente convenio, dando el aviso correspondiente al colaborador acreditado con 60 días hábiles, de anticipación, o modificarlo, en cualquiera de las siguientes situaciones, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena de este instrumento:

A) Cuando los objetivos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado acordado como mínimamente satisfactorio, o cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes no estén siendo debidamente respetados.

b) Cuando las instrucciones impartidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la ley N° 20.032, no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el Servicio.

c) Cuando el personal de los colaboradores acreditados que contraten para la ejecución del respectivo convenio figure en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad o en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar establecido en la ley N° 20.066 o haya sido condenado por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes.

El término anticipado de los convenios será obligatorio si durante su ejecución, se producen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de alguno de los niños, niñas o adolescentes, atribuibles a la responsabilidad del organismo colaborador en los términos establecidos en el número 6) del artículo 2° de la ley N° 20.032, conforme a lo determinado en una sentencia judicial.

En caso de incurrir en infracciones graves, se deberá aplicar el término anticipado y unilateral de los convenios que correspondan, en los casos contemplados en los ordinales ii, iii y iv del inciso quinto del artículo 41 de la ley N° 21.302.

De igual manera, se podrán producir modificaciones al convenio como resultado de las observaciones de la Evaluación de Desempeño, bajo las mismas condiciones descritas anteriormente.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero de esta cláusula, la dirección regional respectiva, en el ejercicio de sus facultades propias, podrá poner término unilateral de los convenios, mediante resolución fundada, atendidos graves incumplimientos imputables al colaborador, en plazos inferiores a los 60 días, para lo cual deberá contar con un informe técnico y/o financiero de dicha instancia regional, el que deberá dar cuenta fundadamente de los hechos en que se sustenta la decisión de término, constitutivos de fuerza mayor - que resultan atentarios en contra de la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico clínico, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones, que debe garantizar este Servicio, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 21.302, y en contra de la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en la ley N° 21.430, constando la fecha a contar de la cual se hará efectivo el término, debiendo notificar el acto administrativo que disponga el término del convenio respectivo, al colaborador, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.880.

En estos y todos aquellos casos en que sea procedente, los colaboradores podrán reclamar de las resoluciones del Servicio, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880.

Asimismo, si el colaborador acreditado le comunica a este Servicio su intención de no continuar con la ejecución del proyecto antes de su fecha de término, por cuanto existen hechos que hacen imposible llevar a buen término su ejecución, se obliga a notificar al Servicio, con el objeto de que sea éste quien adopte la decisión de poner término o no al convenio, por escrito mediante carta dirigida al Director Nacional o Director/a Regional, con, a lo menos, 60 días hábiles de anticipación, debiendo lograr la ubicación de los niños y adolescentes en otros proyectos de similares características, conforme al plan de intervención individual (PII) respetando la zona geográfica de procedencia de los/as niños y adolescentes atendidos.

Las referidas modificaciones y términos de convenio deberán aprobarse por acto administrativo totalmente tramitado, (aplica dictamen N° 8.501, de 2019, de la Contraloría General de la República).

DÉCIMA: De las modificaciones y términos bilaterales.

Las partes comparecientes podrán modificar, de común acuerdo el proyecto, en lo que diga relación con los elementos de carácter accidental que forman parte de los mismos. Se debe dejar establecido que los elementos de carácter esencial de los convenios, tales como el plazo de duración, la focalización territorial y las plazas convenidas, no podrán modificarse bilateralmente, sino que deberá convocarse a un nuevo proceso licitatorio.

Sin embargo, podrán modificarse las plazas, siempre que se configure una situación de fuerza mayor, lo que deberá ser debidamente fundado por la respectiva Dirección Regional. Asimismo, dándose el supuesto recién señalado, la focalización territorial podrá ser modificada, en la medida que no se afecte la atención de los niños, niñas y adolescentes y no se incrementen los montos por beneficiario que el programa respectivo se encontraba percibiendo, especialmente en lo que refiere al factor lugar, todo ello sujeto a la competencia territorial del colaborador acreditado ejecutante.

A su vez, las partes comparecientes podrán poner término a este convenio, de común acuerdo, de manera fundada, con un plazo mínimo de anticipación de 30 días hábiles a su respectivo término, sin perjuicio que pueda acordarse entre las partes, un plazo inferior, siempre y cuando no se funde en situaciones de vulneraciones de los derechos de los niños niñas y adolescentes.

Las referidas modificaciones y términos de convenio, deberán aprobarse por acto administrativo totalmente tramitado, (aplica dictamen N° 8.501, de 2019, de la Contraloría General de la República).

DÉCIMA PRIMERA: De la duración, vigencia y prórroga del convenio.

El convenio suscrito entre el Servicio y el colaborador acreditado adjudicatario comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de la total tramitación de la resolución que lo apruebe, en la medida que se encuentre totalmente tramitada la resolución que lo apruebe. El período máximo de ejecución del proyecto será de **3 años**.

Para efectos de la total tramitación de la resolución que apruebe el convenio respectivo, el colaborador acepta que la notificación de la misma se realice al correo electrónico que haya indicado en el anexo N°2 "Formulario de presentación de proyectos", en el recuadro que se consigna en el párrafo III "Antecedentes del Colaborador Acreditado" del formulario, conforme a lo señalado en el artículo 6: "Notificaciones, plazos y calendario de la licitación".

La vigencia del convenio debe extenderse hasta la aprobación de la rendición de cuentas o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, (aplica dictamen N° 92.578, de 2016, de la Contraloría General de la República).

La obligación de restituir los saldos, no ejecutados, no rendidos u observados, deberá cumplirse dentro de los plazos señalados en el artículo 26 de la ley N°21.722, en los términos señalados en el numeral 10 de la cláusula séptima, correspondiéndole a la autoridad ejercer todas las acciones que resulten necesarias al efecto, (aplica el dictamen N° 43.604, de 2015, de la Contraloría General de la República).

El Servicio podrá de manera excepcional prorrogar sólo por una vez los convenios sin necesidad de un nuevo llamado a concurso, si las evaluaciones de avance y resultados se consideran positivas, lo que se aprobará mediante el acto administrativo correspondiente debidamente fundado. Lo anterior, siempre y cuando al colaborador no le hayan sido aplicadas algunas de las sanciones establecidas en el artículo 41 de la ley N° 21.302, en los últimos doce meses, y no existan antecedentes fundados contra dicho colaborador acreditado o alguno de sus fundadores, directivos o trabajadores por algún ilícito de índole civil, penal o administrativo que constituyan vulneración de derechos contra los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, lo que será evaluado por este Servicio.

DÉCIMA SEGUNDA: De la evaluación del proyecto:

Para este proyecto, las evaluaciones se efectuarán a los **meses 12, 24 y 33** de su ejecución.

Al momento de verificarse la evaluación del proyecto, el colaborador deberá presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1), emanado de la Dirección del Trabajo, que dé cuenta de la situación previsional de todos los trabajadores de la Institución, al último día del mes anterior a aquél en que se cumplen el período objeto de evaluación. El presente requisito sólo será exigible para las entidades privadas.

La evaluación de los convenios se dirigirá a verificar:

1. El respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias.
2. El cumplimiento de los objetivos del convenio.
3. El logro de los resultados esperados especificados en el respectivo convenio.
4. La calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, el estado de salud y de educación de los niños, niñas y adolescentes que en ella residan, y las condiciones físicas del centro de residencia, en su caso.
5. Los criterios empleados por el colaborador acreditado para decidir el ingreso y el egreso de niños, niñas o adolescentes.
6. La administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la subvención, de conformidad con los fines para los cuales aquella se haya otorgado, según la línea de acción subvencionable que corresponda.

Deberán considerarse como criterios objetivos, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato digno y respetuoso a los niños, niñas y adolescentes. El Servicio deberá verificar el cumplimiento del respeto a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de conformidad a las orientaciones técnicas que se dicten para cada modalidad de atención.

b) Revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar. El Servicio deberá verificar que cada modalidad de cuidado alternativo considere acciones destinadas a evitar el ingreso o

prolongación de la estadía de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial o de acogimiento familiar, de conformidad a las orientaciones técnicas y procedimientos que el Servicio dicte al efecto, entre las cuales deberá considerarse una evaluación de la familia centrándose en sus recursos y necesidades de apoyo para el ejercicio de su rol.

c) Asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes. Se entenderá por asistencia oportuna para este efecto, el cumplimiento de las acciones definidas por el Servicio en las orientaciones técnicas orientadas al ejercicio del derecho a la salud y el derecho a la educación.

d) Idoneidad y pertinencia de la intervención ejecutada por los organismos colaboradores orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se entenderá como idónea y pertinente la intervención cuando se haya dado cumplimiento a las acciones definidas por el Servicio en sus orientaciones técnicas, atendiendo a lo menos a la edad del niño, niña y adolescente y su grado de desarrollo, los procesos de intervención que se hubieren desarrollado en forma previa o paralelamente y el personal adecuado para su ejecución.

La evaluación deberá considerar y ponderar tanto las observaciones levantadas en los informes de visita realizadas por los jueces de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, así como aquellas emanadas de otros informes de organismos e instituciones que tengan por objeto la promoción, la protección o la defensa de los derechos de la niñez, y la opinión de los niños, niñas y adolescentes.

El procedimiento para la evaluación de desempeño anual de los convenios ejecutados por los colaboradores acreditados se regulará por lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 4748, de 31 de diciembre de 2019, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, que aprobó el "Procedimiento para la evaluación de desempeño anual de los convenios", o en las instrucciones dictadas por el Servicio que la modifiquen o reemplacen.

Como consecuencia de la evaluación, el Servicio podrá emitir instrucciones particulares a los colaboradores acreditados, indicando las deficiencias a corregir, con la finalidad de que el organismo adopte las medidas que correspondan dentro del plazo que determinará el Servicio, el que no podrá superar los noventa días, pudiendo prorrogarse por una sola vez y por el mismo plazo, en caso de existir razones fundadas. Excepcionalmente, y sólo en los casos en los que la naturaleza de las instrucciones que se ordena cumplir lo exija, podrá otorgarse fundadamente un plazo superior para su cumplimiento.

El retardo injustificado en el cumplimiento de las instrucciones será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 20.032.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la adopción por parte de este Servicio de las demás acciones que contemple la normativa vigente.

DÉCIMA TERCERA: Del destino de los aportes financieros:

El colaborador acreditado como cooperador del Estado en la prestación del servicio de protección especializada gestionará los aportes financieros de todo tipo para el desarrollo de su línea de acción. Estos aportes estarán afectos al cumplimiento de los fines de protección especializada y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, para estos efectos se entenderá que los aportes financieros recibidos se destinan a fines de protección especializada en el caso de las siguientes operaciones:

i) Pago de una remuneración a las personas naturales que ejerzan de forma efectiva funciones de administración superior que sean necesarias para la gestión del colaborador acreditado respecto del o los establecimientos de su dependencia, que se encuentren claramente precisadas en el contrato de trabajo respectivo. Dichas funciones no podrán ser delegadas, en todo o en parte, a personas jurídicas. Se entenderán comprendidas en este numeral las remuneraciones pagadas a las personas naturales que presten servicios en la administración superior del colaborador acreditado.

Estas remuneraciones deberán ser pagadas en virtud de un contrato de trabajo que establezca la dedicación temporal y especifique las actividades a desarrollar, y deberán ser razonablemente proporcionadas en consideración a la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada, a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de semejante naturaleza respecto de gestiones de protección especializada de similar entidad, y a los ingresos del colaborador acreditado por concepto de aportes financieros del Estado, con el objeto de asegurar los recursos para una adecuada prestación del servicio de protección especializada.

Sin perjuicio de lo anterior, los colaboradores acreditados deberán informar al Servicio cuál o cuáles de sus directores ejercerán las funciones indicadas en este numeral.

Por su parte, el Servicio, en uso de sus atribuciones, podrá solicitar información respecto de la acreditación del cumplimiento de dichas funciones.

ii) Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal que cumpla funciones de protección especializada y de operación para el cumplimiento de esas funciones en los establecimientos que pertenezcan al colaborador acreditado.

iii) Gastos de las dependencias de administración del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada.

iv) Costos de aquellos servicios que estén asociados al funcionamiento y administración del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada.

v) Adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos para el buen desarrollo de la línea de acción de

protección especializada, así como recursos e insumos complementarios que sean útiles al proceso integral de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

vi) Inversión en activos no financieros necesarios para la prestación del servicio de protección especializada.

vii) Inversión en activos financieros de renta fija, siempre que los intereses o réditos sean utilizados para los fines de protección especializada dispuestos en este artículo y no se afecte de forma alguna la prestación de servicios de protección especializada.

viii) Gastos asociados a la mantención y reparación de los inmuebles y muebles a que se refieren los numerales anteriores.

ix) Pago de obligaciones garantizadas con hipotecas, contraídas con el solo propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funciona el establecimiento que entrega servicios de protección especializada de su dependencia.

x) Pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el de invertir el dinero de dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del programa de protección especializada del establecimiento respectivo. En caso de que el colaborador acreditado sea propietario de dicha infraestructura, tales créditos o mutuos podrán encontrarse garantizados mediante hipotecas.

Si dichas mejoras superan las 1.000 unidades tributarias mensuales se deberá consultar por escrito al Consejo de Expertos del artículo 9 de la ley N°21.302.

xi) Gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio de protección especializada del o los establecimientos donde se realicen estas prestaciones.

xii) Gastos consistentes con la línea o programa de protección especializada o los establecimientos donde se realicen estas prestaciones.

Las operaciones que se realicen en virtud de los numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi) del inciso segundo estarán sujetas a las siguientes restricciones:

a) No podrán realizarse con personas relacionadas con los colaboradores acreditados o representantes legales del establecimiento, salvo que se trate de personas jurídicas sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente servicios al o los establecimientos de protección especializada de dependencia del colaborador acreditado en materias técnico-pedagógicas, de capacitación y desarrollo de su proyecto educativo. El sostenedor deberá informar

sobre dichas personas al Servicio.

b) Deberán realizarse de acuerdo a las condiciones de mercado para el tipo de operación de que se trate en el momento de celebrar el acto o contrato. Tratándose de operaciones a título oneroso, el precio de la transferencia no podrá ser superior a aquél que prevalece en el mercado.

Se prohíbe a los directores o representantes legales de un colaborador acreditado realizar cualquiera de las siguientes acciones:

1) Inducir a los administradores o a quienes ejerzan cargos análogos a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información.

2) Tomar en préstamo dinero o bienes de la entidad sostenedora o usar en provecho propio o a favor de personas relacionadas con ellos los bienes, servicios o créditos de la entidad colaboradora. 3) Usar en beneficio propio o de personas relacionadas a ellos las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo, en perjuicio de la entidad colaboradora.

4) En general, practicar actos contrarios a los estatutos o al fin de protección especializada del colaborador acreditado o usar su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para personas relacionadas con ellos, en perjuicio de la entidad colaboradora y su fin.

La resolución exenta N°264, de 2024, que instruye sobre el uso y el destino de los aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, en virtud de la ley N°20.032, y procedimiento de rendición de cuentas ante el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, regula en específico algunos gastos por concepto de operaciones a las cuales se destinan los aportes financieros, pagos de obligaciones garantizadas con hipotecas, pagos de créditos bancarios, evaluaciones psico - laborales, bonos de colación y movilización, caja chica, entre otros, estableciendo exigencias para su procedencia o autorización.

DÉCIMA CUARTA: De la rendición de cuentas y el procedimiento de reintegro

En materia de rendición de cuentas regirá lo dispuesto en la resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, lo establecido en la Ley N°20.032 y en las Resoluciones Exentas N°s 208, de 2022, y N° 264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o aquellas que las modifiquen o reemplacen, en todo lo que no se opongan a las disposiciones antes señaladas.

La rendición de cuentas se realizará de manera digital a través del Sistema Nacional de Información de este Servicio (SINAREC), en el módulo rendición de cuentas, de conformidad a la autorización otorgada por la Contraloría General de la República a través de la resolución N°3647, de 2020, o mediante el Sistema Electrónico que pueda adoptar este Servicio conforme a la normativa vigente.

La rendición de cuentas es sobre los gastos realizados en los proyectos en forma posterior a la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio. En casos calificados por el Director Regional, fundamentados en razones de continuidad o buen servicio, podrá incluirse en la rendición de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación de la respectiva resolución.

El reintegro de los aportes financieros procederá en los casos en que el colaborador acreditado destine aquellos a fines distintos de los contemplados en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, no cumpla con los objetivos del proyecto, no presente la documentación original de respaldo que acredite el gasto en la ejecución del proyecto o mantenga saldos no rendidos, observados y/o rechazados respecto de los recursos transferidos para el respectivo proyecto.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo instruido en la resolución exenta N°264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o las instrucciones que la modifiquen o reemplacen, debiendo efectuarse el reintegro de los aportes financieros del Estado en el plazo señalado en la cláusula séptima, N°10 del presente convenio, a fin de dar cumplimiento al artículo 26 de la ley N°21.722 en relación con el artículo 30 del decreto supremo N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez.

DÉCIMA QUINTA: De la supervisión y de la Auditoría de Gestión

El Servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal, reglamentaria y normas técnicas determinadas conforme a ellas, respecto de la ejecución de los programas de protección especializada. La supervisión y fiscalización se hará, al menos, semestralmente respecto de todos los programas a lo largo del país, y tendrá como foco principal el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que sean sujetos de atención del Servicio, el respeto de sus derechos, la calidad y mejora continua de los programas de protección especializada, y la administración proba de los recursos públicos. Deberá contar con la opinión de los niños, niñas y adolescentes atendidos y sus familias y cuidadores. Los resultados de estas fiscalizaciones serán públicos, se comunicarán en lenguaje sencillo y en un formato accesible para cualquier persona.

El Servicio fiscalizará, especialmente:

- i. Que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren sujetos a cuidados alternativos, estén recibiendo cuidados adecuados y permanezcan desarrollándose en su entorno familiar, escolar y comunitario, salvo en aquellos casos en los que los tribunales competentes hagan una suspensión expresa y temporal respecto de su derecho de relación directa y regular con personas determinadas.
- ii. El cumplimiento de los principios, deberes y requisitos establecidos en esta ley, y de los estándares técnicos y de calidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el reglamento a que se refiere el artículo 3 ter de la ley N° 20.530, como condición para la no suspensión de las transferencias y/o de los convenios celebrados con terceros.
- iii. Los reclamos realizados por los niños, niñas y adolescentes atendidos, sus familiares o cuidadores, su naturaleza y gravedad, y la calidad, celeridad y eficiencia de la solución que fue entregada.
- iv. La cabal y oportuna reparación del daño y los perjuicios ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales estando a su cuidado, o con ocasión de las prestaciones realizadas, como condición ineludible para mantener su acreditación como colaborador acreditado.
- v. Que las medidas e intervenciones decretadas por los tribunales de familia se realicen exclusivamente en el plazo en que fueron dictadas para su realización.

En el ejercicio de esta función, el Servicio deberá realizar visitas inspectivas, sin previo aviso, con la periodicidad necesaria para abarcar a todos los colaboradores acreditados.

En los casos en que el Servicio ejecute la línea de acción de cuidados alternativos, por medio de terceros, el Servicio implementará semestralmente una auditoría de gestión e impacto con el fin de fiscalizar los programas ejecutados por colaboradores acreditados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24, inciso penúltimo, de la ley N°21.302.

DÉCIMA SEXTA: De la denuncia de hechos por vulneración de derechos.

Déjase establecido que cualquier obstaculización al ejercicio de su derecho al relacionamiento o comunicación familiar, educativa o comunitaria, así como cualquier amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas o adolescentes acogidos en cuidado alternativo de cualquier tipo, incluso cuando no sea constitutiva de falta o delito, podrá ser denunciada directamente por los afectados o por cualquier persona a su nombre ante las autoridades competentes. Constatados los hechos, el Director Nacional suspenderá el pago del aporte financiero del Estado correspondiente al niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, en tanto la o las personas responsables de la afectación de ese derecho no sean removidas de sus cargos o no sean finiquitados sus servicios, según corresponda.

DÉCIMA SÉPTIMA: De las sanciones.

La realización, por parte de los colaboradores acreditados, de alguna de las conductas que se indican en el artículo 41 de la Ley N°21.302, serán sancionadas con amonestación escrita, multa, término anticipado, inhabilitación temporal y término de acreditación, según corresponda, para cuya aplicación, el Servicio se deberá sujetar al procedimiento previsto en el párrafo 7°, Título III.- De la Protección Especializada, de la ley referida.

DÉCIMO OCTAVA: De la garantía de anticipo

El colaborador acreditado para efectos de garantizar el anticipo solicitado en su propuesta técnica contenida en el Anexo N°2, al momento de suscribir el convenio, Certificado de Fianza 1°0F1EA8 pagadera a la vista nominativa N° de folio F0078802, emitido el 20 de noviembre de 2025 a favor del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, RUT N° 62.000.890-7, emitida por Pro Garantía S.A.G.R., documento pagadero a la vista e irrevocable, por un monto de \$21.207.382 CLP correspondiente al 100% de la cantidad solicitada por concepto de anticipo, y cuya vigencia se mantiene hasta el 30 de noviembre de 2026.

El presente anticipo corresponderá al equivalente de un mes del aporte financiero del Estado y se otorgará sólo al

inicio del proyecto de acuerdo con lo solicitado por el colaborador acreditado. Dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al colaborador acreditado, en un máximo de seis (6) mensuales, iguales y consecutivas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 del D.S N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y familia – Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Hacienda.

El documento que garantice el anticipo sólo será devuelto al colaborador acreditado una vez que se haya pagado la totalidad del anticipo considerando la totalidad de los descuentos que correspondan.

Excepcionalmente, y por razones de buen servicio, los costos financieros en que incurra el colaborador adjudicado para obtener la emisión del instrumento de garantía, y se generen previo a la tramitación de la resolución que aprueba el convenio, podrán incluirse en la rendición de cuentas correspondiente, considerando lo dispuesto en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, el párrafo final del artículo 25, letra b) de la ley N°21.722, lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución Exenta N°30, de 2015 de la Contraloría General de la República y en los dictámenes N°78.106, y N°72.213, ambos del año 2011, del mismo Ente Contralor. Sin perjuicio de lo expuesto, los pagos de los aportes financieros del Estado estarán condicionados a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio.

DÉCIMO NOVENA: Limitación a la subcontratación.

Queda prohibida toda subcontratación.

Lo anterior, es sin perjuicio de los trabajadores que contrate el colaborador acreditado para la prestación de los servicios objeto del presente convenio, los cuales, no tendrán relación laboral alguna con este Servicio, siendo responsabilidad de dicho colaborador en su calidad de empleador, el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

VIGESIMA: Prohibición de fraccionamiento.

De conformidad a la exigencia establecida el artículo 25 letra e) de la ley N°21.722, se adjunta al presente convenio, un anexo que contiene el listado de convenios suscritos por el colaborador acreditado y este Servicio que se encuentran vigentes.

VIGÉSIMA PRIMERA: Prórroga de la competencia.

Para todos los efectos legales que pudieran derivarse de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, prorrogando competencia y sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Ejemplares.

El presente convenio se extiende en tres ejemplares del mismo tenor, valor y fecha, quedando dos en poder del Servicio y el otro en poder de la Institución.

VIGÉSIMA TERCERA: Personerías.

La personería de doña **MARCELA GAETE REYES** para representar al Servicio, consta en Resolución N°RA215067/50/2023 de fecha 20 de enero de 2023, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que la nombra en cargo de Alta Dirección Pública de directora regional de la Región Metropolitana.

La personería de don **RAFAEL DE PUJADAS LIRA**, para representar al **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**, consta en acta de la sesión extraordinaria de directorio de IDECO, celebrada el 29 de abril del 2024, reducida a escritura pública con fecha 8 de mayo del 2024, ante don **SERGIO ARTURO MARTEL BECERRA**, notario titular de la vigésimo cuarta notaria de Santiago.

Constan las Firmas.

2º El gasto que demande el cumplimiento del convenio que se aprueba mediante la presente resolución se hará con cargo al Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 01 al Sector Privado, Asignación 004 Cuidado Alternativo, del presupuesto vigente del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para el año 2025. El monto que se transferirá el año 2025 será de hasta **\$21.207.382.-** El saldo si lo hubiere, se imputará al ítem del presupuesto del/los año/s correspondiente/s, en la medida que se contemplen las disponibilidades presupuestarias respectivas

3º PUBLÍQUESE la presente resolución, el proyecto y presupuesto adjudicado, así como, el convenio asociado a éste, en la página web del Servicio www.servicioproteccion.gob.cl, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N°21.722 y el artículo 7 de la ley N°20.285.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



MAX CRISTOBAL CALDERON ALVAREZ
Director Regional Metropolitana (S)

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
CONVENIO	Digital	Ver		

NCS/KMM/NBS

DISTRIBUCIÓN:

1. UNIDAD DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS
2. FISCALÍA
3. UNIDAD JURÍDICA REGIONAL METROPOLITANA
4. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA OFERTA REGIONAL METROPOLITANA



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://ceropapel.servicioproteccion.gob.cl/validar/?key=23382104&hash=4a11b>



CONVENIO
ENTRE
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Y
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS
VERGARA
PROYECTO “PRM – IDECO ALGARROBO”

En Santiago, a 21 de noviembre de 2025, comparecen **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**, en adelante el "**COLABORADOR ACREDITADO**", RUT N°71.877.800-K, domiciliado en Primera Transversal N°2630, comuna de Maipú, Región Metropolitana, representado por don **RAFAEL DE PUJADAS LIRA**, cédula nacional de identidad N°15.318.566-2, del mismo domicilio, y el "**SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**", en adelante "**MEJOR NIÑEZ**" o el "**SERVICIO**", servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, creado por la ley N°21.302, representado por su Directora Regional de la región Metropolitana, doña **MARCELA ALEJANDRA GAETE REYES** cédula nacional de identidad N.º12.292.208-1, ambos domiciliados en **avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1449, torre 7, piso 3**, comuna de **Santiago**, quienes acuerdan el siguiente convenio:

PRIMERA: Antecedentes.

Las partes declaran que este convenio es el resultado del concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave; programa de intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la integración a familia alternativa a la de origen; y programa especializado en explotación sexual comercial infantil y adolescente, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad con la ley N° 20.032, autorizado mediante la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, se adjudicó, mediante la resolución exenta N° 635, de fecha 19 de junio de 2025, no obstante, dicho acto administrativo fue dejado sin efecto y, en consecuencia, se readjudicó el código N°1939 mediante la Resolución Exenta N° 878, de fecha 12 de agosto de 2025, el proyecto denominado "**PRM – IDECO ALGARROBO**" de la línea de acción y programa mencionados, al colaborador acreditado **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**.

SEGUNDA: Objeto social.

El colaborador acreditado tiene por objeto social: Promover y recuperar las líneas de formación, organización y producción entre los pobladores del sector urbano. Para ello se especifica lo siguiente: A) En la línea de formación se desarrollará en los pobladores la participación, la integración social, la integración familiar, el desarrollo cultural. todo lo anterior a través de cursos, charlas diarias murales, boletines y contactos permanentes con los agentes externos que trabajan en el sector. B) En la línea de organización se desarrollará el interés por participar en las organizaciones vivas y organizaciones estatales, esta última se entiende referida a las juntas de vecinos, centros de madres,



codecos y proyectos de autoconstrucción. C) En la línea de la integración social se desarrollaran todas las acciones necesarias que vinculen a los pobladores con la sociedad en su conjunto, comprendiéndose, entre otras, las personas naturales o jurídicas, grupos étnicos y demás entes intermedios y viceversa; D) En la línea de producción se desarrollaran en el sector, centros de producción comunitaria (c.p.c.) y pequeñas empresas autogestionadas aumentado la capacidad de ahorro y mejoramiento de los ingresos familiares.- para la implementación de estos objetivos ideco se hará la estructura interna necesaria, E) En la línea de capacitación laboral se desarrollaran todas las acciones necesarias para la ejercicio de servicios de la misma, todo lo anterior, apoyado por diferentes programas, concursos, charlas, seminarios, congresos, medios de comunicación, investigación, publicaciones, contacto con agentes comunitarios u otros y demás medios disponibles. F) En la línea de trabajo con infancia, adolescencia y juventud y/o familia se su buscar a" proteger y/o restituir derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, situándolo en el centro de nuestro actuar, garantizando su participación y/o la de sus familias, fortaleciendo su desarrolla integral, reparando y resignificando el daño, previniendo de manera oportuna nuevas vulneraciones. para lo anterior disponer de equipo técnicos de excelencia y programas especializados de acuerdo con sus necesidades, buscando la permanente coordinación con el interceptor y con quien corresponda, convocando a la sociedad toda.

TERCERA: Sujeción a normas.

El colaborador acreditado, en este acto, declara conocer, entender y estar conforme con las menciones a los cuerpos legales a que se hace referencia en este convenio, en especial a las leyes N°s 21.722, 21.302 y 20.032 y a lo dispuesto en el decreto supremo N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez.

Las partes dejan expresa constancia que se regirán por la normativa anteriormente señalada, lo dispuesto en las bases administrativas, técnicas y anexos del cuarto concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave; programa de intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la integración a familia alternativa a la de origen; y programa especializado en explotación sexual comercial infantil y adolescente, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, autorizado mediante la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025, de la Dirección Nacional del Servicio, así como, en las consultas, respuestas y aclaraciones del certamen - en la medida que no resulten contrarias a las bases de licitación y sus anexos - y en toda otra normativa que le sea aplicable según la naturaleza del presente convenio.

Por otra parte, respecto del uso de los recursos transferidos a los colaboradores acreditados de naturaleza privada, resultarán aplicables las normas contempladas en los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; en todo lo pertinente en cada caso; así como las normas de transparencia y probidad establecidas en la Constitución Política de la República de Chile. Cabe destacar que el Estado de Chile ha adscrito a estándares y directrices internacionales que habrán de tenerse presentes para esos efectos, tales como los relativos a ciberseguridad, los establecidos en la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos- OEA- sobre acceso a la información y especialmente en las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidados de Niños, Resolución 64/142 de la Organización de las Naciones Unidas- ONU-.



CUARTA: Individualización del proyecto.

Del colaborador dependerá el proyecto denominado “**PRM – IDECO ALGARROBO**”, cuya sede estará ubicada en Calle Verona N°1458, Villa Italia, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, que será supervisado por la Dirección Regional Metropolitana.

El objetivo general del referido proyecto es:

- Contribuir al proceso reparatorio¹ del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o psicológico² grave, constitutivo de delito y/o agresión sexual infantil.

El proyecto presentado por el colaborador acreditado se encuentra contenido en el Anexo N°2 “Formulario de presentación de proyectos”, de las bases de licitación del Cuarto Concurso Público de proyectos, y se adjunta al presente convenio.

El proyecto presentado por el colaborador acreditado formará parte integrante del convenio.

El Resumen Ejecutivo del proyecto es el siguiente:

Los objetivos específicos del referido proyecto son los siguientes:

- Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso, constitutivo de delito, mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal del niño, niña o adolescente y facilitar el acceso a la red de justicia.
- Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y el adulto responsable.
- Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o adolescente víctima de maltrato y abusos.

Los resultados esperados del referido proyecto y las actividades específicas a desarrollar son los siguientes:

ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO ESPECÍFICO N°1	ETAPA DE INTERVENCIÓN	MEDIOS DE PRUEBA	CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO
“Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal del			

¹ Por reparación estamos entendiendo la resignificación del daño asociado a la experiencia de maltrato grave o agresión sexual.

² El maltrato psicológico sólo es constitutivo de delito en el contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF), como se define en la ley N°20.066 Ley de Violencia intrafamiliar. Artículo 5 (definición de VIF) y artículo 14 (delito de maltrato habitual).

niño/a y facilitar el acceso a la red de justicia”			
1.- Sesión de entrevista de pre-calificación con énfasis en conocer la situación de abuso y/o maltrato con perspectiva socio jurídica con familia y adulto significativo, orientada a despejar la situación proteccional actual del NNA relevando factores protectores y de riesgo, en consideración al resguardo de su interés superior.	Evaluación de ingreso	Ficha de pre-calificación • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Informativo de ingreso • Oficio de ingreso efectivo	Aporta a la profundización respecto de la situación actual, vislumbrando elementos significativos para pensar el proceso de intervención
2.- Sesión de acogida con el NNA y su familia y/o adulto significativo, considerando la experiencia de maltrato y/o abuso vivenciado por el NNA, y en concordancia a la etapa del ciclo vital del NNA y su familia	Evaluación de ingreso	Ficha de pre-calificación • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Informativo de ingreso • Material audiovisual para la presentación del modelo de atención • Autorización de uso de imagen • Informativo Modelo de Prevención del Delito IDECO.	Esta actividad contribuye al logro del objetivo, mediante el acceso oportuno a la protección y justicia para el NNA, mediante la difusión acerca de la existencia de mecanismos judiciales disponibles para abordar su situación legal. En esta instancia, se entregará información clara y comprensible sobre los procesos y herramientas socio jurídicas disponibles, con el objetivo de garantizar la interrupción efectiva de las situaciones de vulneración y facilitar la vinculación del NNA y su familia con la red de justicia, promoviendo así la restitución de sus derechos desde el

			inicio del proceso reparatorio
3.- Visita domiciliaria con fines de profundización diagnóstica en relación con las condiciones socioeconómicas con una perspectiva familiar relacional y socio contextual con pertinencia cultural	Evaluación de ingreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye a conocer el contexto real del espacio cotidiano de desarrollo del NNA, pudiendo relevar en terreno factores de protección y de riesgo asociados a las situaciones de vulneración
4.- Elaboración de informe diagnóstico y estados de avance, con énfasis en la identificación de condiciones de protección, seguridad y factores de riesgo, considerando el pronóstico del caso y las posibilidades de intervención. Este análisis se realizará en función de las necesidades particulares y específicas de cada NNA, permitiendo orientar los ajustes necesarios en el proceso reparatorio	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Insumos de la profundización diagnóstica • Registro de evacuación de informe a Juzgado de Familia.	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, ya que permite identificar, mediante los informes, las condiciones actuales de protección, seguridad y riesgo que enfrenta el NNA. A partir de este análisis, se puede fundamentar técnica y jurídicamente la necesidad de activar mecanismos judiciales adecuados para resolver su situación legal. Asimismo, el informe orienta la articulación con la red de justicia, facilitando el acceso a medidas cautelares, de ser necesarias, que garanticen la interrupción efectiva de la vulneración y el restablecimiento de sus derechos.
5.- Sesiones de intervención en crisis con NNA y su familia y/o adulto relacionado, a fin de	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Las sesiones de intervención en crisis con el NNA y su familia y/o adulto significativo

visualizar situaciones de riesgo que afecten de manera inminente a la protección y seguridad del NNA y la activación de mecanismos judiciales que permitan la visualización de los hechos, garantizando el acceso oportuno a las garantías del Estado	<ul style="list-style-type: none"> PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 		contribuyen directamente al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, ya que permiten identificar y abordar de forma inmediata situaciones de riesgo que amenacen la protección y seguridad del NNA. A través de estas sesiones, se recogen antecedentes relevantes que sustentan la activación oportuna de mecanismos judiciales, favoreciendo la visibilización de los hechos y facilitando el acceso efectivo a las garantías y recursos del Estado, en el marco de la red de justicia.
6.-Activación de procedimiento de Resolución Exenta N° 155, a propósito de develación y/o despeje de nuevas situaciones de vulneración de derechos que sean parte de la causal de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	<p>SIS Informático del Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual activación de procedimiento • Denuncia en Fiscalía • Oficio a Juzgado de familia • Apertura de Registro único de caso en SIS 	Esta acción contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al permitir la derivación inmediata a la autoridad competente, facilitando la activación de los mecanismos judiciales necesarios para abordar la situación legal del niño o niña y garantizar su acceso oportuno a la red de justicia y protección de parte de los organismos judiciales

7.- Revisión y análisis de los antecedentes sociojurídicos del caso, incorporando los enfoques transversales (derechos, género, curso de vida, interculturalidad, inclusión, entre otros) y las características particulares de la situación de vulneración, así como del NNA y su grupo familiar.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye a interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al generar insumos técnicos necesarios para la activación fundamentada de mecanismos judiciales, permitiendo resolver la situación legal del niño o niña y facilitar su acceso efectivo a la red de justicia.
8.- Acciones de coordinación con curaduría ad-litem y redes institucionales judiciales, a fin de garantizar la movilidad y respuesta oportuna en términos de recursos jurídicos de protección	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al facilitar la activación de mecanismos judiciales adecuados para resolver la situación legal del NNA y asegurar su acceso efectivo a la red de justicia, resguardando así su integridad y derechos fundamentales.
9.- Acciones de intervención sociojurídicas proteccionales, mediante la participación activa del abogado del programa y profesionales intervinientes a través de la entrega de antecedentes ante órganos competentes y participación efectiva en	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Informes remitidos • Copias de actas de audiencia y resoluciones recepcionadas. 	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al permitir la activación efectiva de mecanismos judiciales que resuelvan la situación legal del NNA, representando su interés superior e incorporando su opinión manifiesta, conforme a su edad y

procedimiento judiciales (juicios, audiencias, entre otros). Representación del interés superior, dando cuenta y en consideración de la opinión manifiesta del NNA.			madurez, en todas las instancias del proceso judicial.
10.- Reunión de análisis de caso entre los integrantes del equipo, pudiendo incorporar otros actores, tales como supervisores técnicos, y coordinadores.	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Pautas de análisis de caso	Esta actividad contribuye al logro de interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, al generar un análisis técnico interdisciplinario que permite fundamentar la activación de mecanismos judiciales adecuados, resolver la situación legal del NNA y facilitar su acceso oportuno y pertinente a la red de justicia

ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 "Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y adulto/a responsable."	ETAPA DE INTERVENCIÓN	MEDIOS DE PRUEBA	CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO
1.-Sesiones de entrevista clínica con el NNA con fines de profundización diagnóstica, orientadas a pesquisar y analizar indicadores de daño, dinámicas	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye a favorecer la resignificación del maltrato o abuso, al permitir que el NNA exprese y elabore su experiencia en un espacio seguro. A través de la entrevista

traumatogénicas, comprensión subjetiva de las experiencias vividas, estrategias de afrontamiento y construcción de narrativas personales. Estas sesiones permiten relevar elementos clave que permitirán una comprensión de las experiencias de maltrato y/o abuso de la que fue víctima.			clínica, se identifican indicadores de daño, recursos de afrontamiento y significados personales. Esto facilita la construcción de un relato reparador y promueve el inicio del proceso reparatorio junto a su adulto/a responsable
2.- Sesiones de entrevistas clínicas con familia y/o adulto significativo con fines de profundización diagnósticas respecto de las condiciones familiares para identificar la expresión del daño, significaciones y construcciones de la narrativa de la experiencia.	Evaluación de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye a favorecer el proceso de resignificación, al permitir que el adulto/a responsable integre una mirada reflexiva del daño, fortaleciendo su rol protector y su participación activa en el proceso reparatorio del NNA.
3.-Aplicación de instrumentos de evaluación al NNA basado en la evidencia y atinentes a la situación que origina el ingreso a fin de despejar y propender a la resignificación y comprensión de la experiencia. (Escala: Escala de resiliencia 14 ítems, Inventario de fortalezas y virtudes para niños y niñas, entre otros. Test	Evaluación de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Diagnóstico Individual • Tabulación y protocolos de instrumentos 	Contribuye directamente a favorecer el proceso de resignificación, al permitir una comprensión profunda de la experiencia vivida y orientar acciones reparatorias que integren al NNA y a su adulto/a responsable en la construcción de un nuevo significado, más seguro y protector.

proyectivos: CAT-A, CAT-H, TRO Graficas la Familia, HTP, PBLL, caja de arena, juego simbólico) *Las técnicas se definen en virtud de las necesidades y características de cada caso.			
4.-Aplicación de instrumentos de evaluación a familia y/o adulto significativo basado en la evidencia y atingentes a la situación que origina el ingreso, a fin de despejar y propender a la resignificación y comprensión de la experiencia. (Genograma, ecomapa, visita domiciliaria, batería diagnóstica sociofamiliar) *Las técnicas se definen en virtud de las necesidades de cada caso.	Evaluación de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> SIS Informático del Servicio Carpeta individual del NNA Registro de intervención individual Diagnóstico Sociofamiliar 	Esto contribuye a favorecer el proceso de resignificación del maltrato o abuso, promoviendo una mirada reflexiva de la experiencia vivida, el fortalecimiento del rol protector y la reconstrucción de vínculos significativos desde una perspectiva reparadora.
5.-Sesión de co-construcción del PII con el NNA y su familia y/o adulto relacionado, en función de propender a la resignificación de las experiencias de maltrato y/o abuso sexual, considerando e incorporando el interés superior del NNA, así como su opinión manifiesta y todo lo relativo a	Evaluación de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> SIS Informático del Servicio Carpeta Individual del NNA Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye al logro del proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el NNA y adulto/a responsable”

enfoques transversales.			
<p>6.-Acciones de diseño de PII (considera actualización que considere los recursos de cuidado, interés superior del NNA, y factores resilientes considerando el enfoque de derechos humanos. *Las actualizaciones se realizarán cada 6 meses posterior al término de la etapa de evaluación de ingreso y/o cada vez que exista un cambio significativo en la vida del NNA.</p>	<p>Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual • PII 	<p>Esta actividad contribuye directamente al proceso de resignificación, ya que orienta una intervención coherente con su historia, promueve su participación activa y la de su adulto/a responsable, y favorece la construcción de nuevas experiencias vinculares seguras que reparan el daño vivido.</p>
<p>7.-Elaboración y envío de informes diagnósticos y de estados de avance, integrando indicadores de daño, condiciones actuales, pronósticos, así como avances y retrocesos del proceso interventivo. Todo ello será desarrollado bajo los principios del enfoque de derechos y en resguardo del interés superior del NNA, asegurando que la información técnica oriente decisiones protectoras y ajustadas a sus necesidades particulares.</p>	<p>Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Insumos de la profundización diagnóstica • Registro de evacuación de informe a Juzgado de Familia. 	<p>Esta actividad contribuye al logro de favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y su adulto/a responsable, ya que permite visibilizar y sistematizar, de manera técnica y comprensible, los efectos del daño, los avances del proceso reparatorio y las condiciones de protección actuales</p>

8.- Sesión psicoterapéutica individuales con el NNA, con el objetivo de promover la integración adaptativa de la experiencia, reducir la sintomatología asociada, y favorecer la construcción de una identidad resiliente, en la que el trauma no define el desarrollo del NNA. Mediante técnicas como bandeja de arena, rituales, celebración, hora de juego terapéutico, arteterapia, técnicas narrativas, cuentos, diarios, mapa de las emociones). Es dable señalar que las técnicas se definirán en concordancia con las necesidades de cada NNA.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Contribuye al logro mediante el abordaje de los indicadores de daño, tendiendo a la resignificación de las experiencias.
9.- Sesiones con familia y/o adulto significativo, facilitando los procesos de interrupción de la situación de maltrato y/o abuso, favoreciendo la resignificación de esa experiencia y el fortalecimiento de recursos familiares y sociales que sustentan el bienestar integral del NNA	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye al logro de favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y su adulto/a responsable, ya que las sesiones con la familia y/o adulto significativo permiten abordar las dinámicas que dieron origen a la vulneración, promoviendo su comprensión y transformación desde

			una mirada protectoras.
10.-Sesiones en grupo que permiten a los NNA compartir experiencias, generar redes de apoyo y facilitar procesos de elaboración del trauma, favoreciendo la individuación y diferenciación, ya que la interrelación con otros permite a cada participante reconocerse con mayor claridad.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro, toda vez que promueve la elaboración del trauma, fortalece la identidad, y permite resignificar lo vivido desde una perspectiva colectiva y reparadora, facilitando además la construcción de vínculos protectores y redes de apoyo significativas
11.- Sesión familiar con componente vincular en función de observar, intervenir y resignificar el vínculo entre el NNA y sus figuras significativas, promoviendo relaciones más protectoras, empáticas y coherentes con las necesidades del NNA.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Se contribuye al logro debido a que facilita la construcción de nuevas experiencias relacionales basadas en la protección, la empatía y la contención emocional, lo que posibilita reparar el daño vincular, generar confianza y promover relaciones coherentes con las necesidades emocionales del NNA en su proceso reparatorio.
12.-Sesiones de intervención en crisis con NNA y su familia y/o adulto relacionado, asegurando la contención y estabilidad psicoafectiva en momentos críticos, con la inclusión de sus familias y/o adultos significativos en el proceso de intervención.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro, considerando que la intervención en crisis permite contener emocionalmente al NNA en momentos de alta vulnerabilidad, resguardando su estabilidad psicoafectiva. Al integrar a la familia o adulto significativo en estos espacios, se fortalece el rol protector, se

			refuerzan los vínculos seguros y se crean condiciones emocionales que facilitan la elaboración del daño vivido,
13.- Gestión de redes, orientadas a fortalecer la articulación entre los diversos actores del sistema de protección, educación, salud y justicia con el propósito de garantizar una respuesta integral y efectiva para la reparación del daño y la protección de los NNA que propenda a la reducción de los indicadores de daño asociadas a las dinámicas abusivas y/o de maltrata que fueron víctimas	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuye al logro, considerando que la gestión de redes permite articular una respuesta interinstitucional coordinada y coherente, que asegura el acceso oportuno a prestaciones de protección, salud, educación y justicia. Esta articulación fortalece los factores protectores del entorno, disminuye la exposición a nuevas vulneraciones, y crea condiciones más estables y reparadoras.
14.-Visitas domiciliarias considerando estrategias psico/socio educativas a fin de que contribuyan a la disminución y reparación de los indicadores de daño, asociado a las situaciones de vulneración que afectaron al NNA.	Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Contribuyen al logro, ya que las visitas domiciliarias, permiten intervenir directamente en el contexto cotidiano del NNA, favorecen la identificación y modificación de prácticas de riesgo, el fortalecimiento del rol protector del adulto responsable y la generación de condiciones más seguras y reparadoras en el entorno familiar.
15.- Reunión de análisis de caso entre los integrantes del equipo, pudiendo incorporar otros	Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención	Esta actividad contribuye, ya que permite al equipo interventivo generar una comprensión

actores, tales como supervisores técnicos del SPE, y coordinadores de la institución.	PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso	individual • Pautas de análisis de caso	compartida, profunda y especializada de la situación del NNA, integrando diversas miradas profesionales. La participación de supervisores y coordinadores fortalece la toma de decisiones clínicas y estratégicas, asegurando que la intervención sea coherente, contextualizada y ajustada a las necesidades del NNA, lo que favorece un proceso reparatorio más significativo y sostenido en el tiempo.
---	---	---	---

ACTIVIDADES PRINCIPALES OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 “Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o adolescente, víctima de maltrato y abusos.”	ETAPA DE INTERVENCIÓN	MEDIOS DE PRUEBA	CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO
1.- Sesiones de Entrevistas clínicas con familia y/o adulto significativo, orientadas a profundizar en las condiciones familiares, identificando pautas de crianza, dinámicas relacionales y competencias parentales, en	Evaluación de ingreso	• SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual	Esta actividad contribuye al logro, ya que permite identificar y analizar las dinámicas familiares, competencias parentales y pautas de crianza asociadas a la experiencia de vulneración. A partir de esta comprensión, es posible diseñar intervenciones focalizadas que

relación con la experiencia de vulneración del NNA y su impacto en la vida cotidiana.			promuevan el fortalecimiento del entorno protector, favoreciendo un acompañamiento más efectivo y sostenido del NNA en su proceso reparatorio
2.-Visita domiciliaria con fines de profundización diagnóstica orientadas a pesquisar las condiciones familiares, identificando pautas de crianza, dinámicas relacionales y competencias parentales, en relación con la experiencia de vulneración del NNA y su impacto en la vida cotidiana	Evaluación de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye al logro, ya que permite constatar en terreno y analizar las dinámicas familiares, competencias parentales y pautas de crianza asociadas a la experiencia de vulneración. A partir de esta comprensión, es posible diseñar intervenciones focalizadas que promuevan el fortalecimiento del entorno protector, favoreciendo un acompañamiento más efectivo y sostenido del NNA en su proceso reparatorio
3.-Aplicación de instrumentos de evaluación a familia y/o adulto significativo basado en la evidencia y atinentes a la situación que origina el ingreso, a fin de despejar y evaluar las relaciones familiares y vínculos afectivos (Genograma, ecomapa, visita domiciliaria, NCFAS G+R, PMF, PSI-SF, E2P, video feedback). Es dable señalar que las	Evaluación de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Diagnóstico Sociofamiliar 	Esta actividad contribuye al logro, dado que permite evaluar en profundidad las relaciones familiares, los vínculos afectivos y las condiciones del entorno. Esta información facilita la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de intervención, orientando acciones terapéuticas que promuevan un entorno protector y

técnicas se definirán en concordancia con las necesidades de cada NNA.			reparador para el NNA.
4.-Elaboración y envío de informes diagnósticos y de estados de avance, integrando indicadores de daño, condiciones actuales, pronósticos, así como avances y retrocesos del proceso interventivo con énfasis en las relaciones y vínculos familiares que se orienten a las garantías de seguridad y protección	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	<ul style="list-style-type: none"> • SIS Informático del Servicio • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Insumos de la profundización diagnóstica • Registro de evacuación de informe a Juzgado de Familia. 	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que los informes diagnósticos y de avance permiten monitorear el impacto del proceso interventivo, especialmente en los vínculos familiares y condiciones de seguridad, orientando decisiones que promuevan el bienestar y protección del NNA
5.-Acciones de diseño de PII (considera actualización*que considere los recursos de cuidado, interés superior del NNA, y factores protectores mediante el ejercicio de la parentalidad y condiciones sociales. *Las actualizaciones serán cada 6 meses posterior al término de la etapa de evaluación de ingreso y/o cada vez que exista un cambio significativo en la vida del NNA	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta Individual del NNA • Registro de intervención individual • PII 	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, al diseñar o actualizar el PII incorporando factores protectores, recursos de cuidado y ejercicio de la parentalidad, en concordancia con el interés superior del NNA, favoreciendo su bienestar psicológico y social.
6.- Sesión familiar a fin de fortalecer y desarrollar pautas relacionales protectoras a partir de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad fortalece los recursos familiares y sociales, al promover vínculos protectores y competencias

familiares, promoviendo relaciones más protectoras, empáticas y coherentes con las necesidades del NNA. Mediante técnicas como, cartas terapéuticas, técnicas de interacción guiada, técnicas basadas en la mentalización, entre otras. *Las técnicas se definen en virtud de las necesidades de cada caso.			parentales, mediante técnicas terapéuticas que favorecen relaciones empáticas y coherentes con las necesidades del NNA, contribuyendo así a su bienestar psicológico y social.
7.-Sesiones socioeducativas con familia y/o adultos significativos, orientado a que desarrollen y fortalezcan sus competencias parentales a partir de los recursos familiares a fin de promover el bienestar psicológico y social del NNA.	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad de realizar sesiones socioeducativas, contribuye a promover el fortalecimiento de las competencias parentales, basándose en los recursos familiares disponibles. Esto permite generar entornos más protectores y conscientes, que favorecen directamente el bienestar psicológico y social del NNA.
8.- Acciones de gestión con redes comunitarias e institucionales a fin de que se contribuyan al fortalecimiento de las pautas relacionales protectoras a partir de las competencias de los adultos significativos, a través de los	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que la gestión con redes comunitarias e institucionales permite ampliar el acceso a apoyos y servicios, reforzando las competencias de los adultos significativos y favoreciendo pautas

accesos a la oferta y recursos			relacionales protectoras, lo que impacta positivamente en el bienestar psicológico y social del NNA.
9.- Visitas domiciliarias mediante uso de estrategias educativas a partir de los recursos familiares, promoviendo relaciones más protectoras, empáticas y coherentes con las necesidades del NNA. Utilizando técnicas de reconocimiento, validación, mapa de redes, genograma, acuario familiar, rituales, espacios de arte terapia. Es dable señalar que las técnicas se definirán en concordancia con las necesidades del caso.	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual 	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que las visitas domiciliarias permiten intervenir en el entorno natural del NNA, promoviendo vínculos protectores y empáticos
10.- Reunión de análisis de caso entre los integrantes del equipo, pudiendo incorporar otros actores, tales como supervisores técnicos del SPE, y coordinadores de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de ingreso • Diseño del Plan de Tratamiento Individualizado o PII • Ejecución del plan • Seguimiento • Egreso 	SIS Informático del Servicio <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta individual del NNA • Registro de intervención individual • Pautas de análisis de caso 	Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los recursos familiares y sociales, ya que la reunión de análisis de caso permite integrar diversas miradas profesionales para comprender de forma más profunda la dinámica familiar y los factores de riesgo y protección. Esto favorece la definición de estrategias ajustadas al contexto del NNA, orientadas a



			fortalecer su entorno familiar y promover su bienestar psicológico y social.
--	--	--	--

El mecanismo que el Servicio y el colaborador acreditado empleará para evaluar su cumplimiento consistirá en la realización de la evaluación del proyecto.

QUINTA: Beneficiarios.

Los beneficiarios serán aquellos indicados en las respectivas bases técnicas correspondiente a la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente **programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave (PRM)**, en el proyecto aprobado por el Servicio y en el Anexo N°1 denominado “Plazas a licitar y focalización territorial” del cuarto concurso público de proyectos, cuya convocatoria fue autorizada por la resolución exenta N°206, de 28 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que indica lo siguiente:

REGIÓN	CÓDIGO LICITACIÓN	LÍNEA DE ACCIÓN	MODALIDAD	MODELO	COMUNA BASE PREFERENTE	FOCALIZACIÓN	COBERTURA
METROPOLITANA DE SANTIAGO	1939	INTERVENCIONES AMBULATORIAS DE REPARACIÓN	PRM – PROGRAMA ESPECIALIZADO EN MALTRATO	PRM	CERRO NAVIA	RENCA – CERRO NAVIA	100
EDAD	SEXO	FACTOR ZONA	COSTO NIÑO MES	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	MONTO PERIODO A LICITAR	PERIODO A LICITAR
0 A 17 AÑOS, 11 MESES, 29 DÍAS	A	0%	\$212.074	\$21.207.382	\$254.488.582	\$763.465.746	3 AÑOS

La atención se prestará bajo la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave y el Servicio atenderá en el programa **100 plazas**.

SEXTA: Monto, forma y requisitos para el pago.

El monto total del presente convenio asciende a la suma de **\$763.465.746.-**, conforme al valor establecido en el certificado emitido por el Departamento de Gestión Financiera de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional del Servicio. Dicho valor se actualizará de acuerdo con lo señalado en la presente cláusula.

Los aportes financieros otorgados por este Servicio se determinarán de acuerdo a lo señalado en los artículos 29 y 30 de la ley N°20.032 y su reglamento, contenido en el decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez. El aporte financiero del Estado se expresa en Unidades de Fomento y será calculado y se actualizará considerando el valor que dicha unidad registre al 1 de enero del año correspondiente.



Para el año 2025 el valor de la Unidad de Fomento al 1 de enero corresponde a \$38.419,17.

Para el cálculo del valor efectivo de los aportes financieros del Estado de la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, modelo de intervención Programas de Protección Especializada, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:

$$\text{Aporte financiero} = \#NNA \text{ Atendidos} * \text{Valor Base} * (1 + \sum \text{Factores del criterio})$$

Por “NNA atendidos”, se entenderá a los niños, niñas y adolescentes atendidos en el mes, los que no podrán superar las plazas convenidas. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley N° 21.302, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

Para el cálculo del valor de los aportes financieros del Estado a transferir a los colaboradores que desarrollen programas de protección especializada se considerarán los siguientes valores y criterios:

Programas	Valor Base UF Mensual	Criterio
Programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave	5,52	Lugar

Tablas: criterios, categorías y factores:

Categoría para asignación del criterio lugar: este criterio está referido a la ubicación donde se desarrollará el respectivo proyecto, de acuerdo al cuadro establecido en el artículo 10 del reglamento de la ley N° 20.032, aprobado por el decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez-.

En el Reglamento ya citado se encuentra el listado correspondiente a las regiones, provincias comunas o ciudades con las categorías correspondientes.

Los factores asociados a cada tipo de lugar serán los siguientes:

Categoría	Factor
Lugar A	0%
Lugar B	14%
Lugar C	28%
Lugar D	56%
Lugar E	84%
Lugar F	100%

Este criterio se aplicará todos los modelos de intervención de las líneas de acción. Este criterio incluye la disponibilidad y costos de los recursos humanos y materiales necesarios en la localidad en que se desarrollará el proyecto de conformidad a lo previsto en el número 3 del artículo 29 de la ley N° 20.032.



Los programas de esta línea de acción se pagarán por niño, niña y adolescente atendido en el mes, los que no podrán superar las plazas convenidas. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley 21.302, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N° 20.032, el colaborador acreditado deberá cumplir los siguientes requisitos para el pago:

a) Contar con un 75 por ciento del personal conformado por profesionales y/o técnicos especializados acordes a la respectiva línea programática, incluyendo a quienes trabajen en trato directo con los niños, niñas y adolescentes.

La especialización deberá acreditarse, ante el Servicio, mediante los respectivos títulos profesionales de grado y certificados de especialización o postgrado que lo avalen, con determinación específica y detallada del ámbito de su experticia. Tales antecedentes estarán disponibles para las autoridades competentes que los requieran.

b) Comparecer sus profesionales o peritos a declarar ante el tribunal a las audiencias a las que se les cite en razón de su cargo o experticia, eximiéndose de esta obligación sólo cuando el tribunal los libere de ella, lo que será debidamente acreditado con copia autorizada de la respectiva resolución judicial que así lo señale.

c) Cumplir las respectivas pericias o informes de seguimiento de avance de intervenciones con los estándares requeridos para tener valor probatorio. De no hacerlo, el tribunal deberá remitirlos al Director Nacional del Servicio, con copia al Director Regional correspondiente, a efectos de suspender los respectivos pagos al colaborador, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan, las cuales el juez sugerirá cuando se trate de una práctica frecuente del respectivo programa.

Si en la fiscalización a la que se refiere el artículo 39 de la ley N°21.302, se identifica el incumplimiento de alguna exigencia, el Servicio podrá retener el pago de los recursos a los que se refiere este artículo hasta en el 50 por ciento, hasta que el colaborador acreditado disponga de las medidas necesarias para cumplir con la exigencia no satisfecha. En tal caso, el Servicio deberá contar con planes de asesoría y mejoramiento para asegurar que el colaborador acreditado cumpla con las exigencias no satisfechas en la fiscalización.

El Servicio transferirá el monto de los aportes financieros del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la ley, en forma mensual, y dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al mes de entrada en vigencia del convenio respectivo, siempre que el colaborador acreditado que ejecuta el proyecto haya informado las atenciones en los plazos establecidos por el Servicio, y así sucesivamente, a excepción de los proyectos de emergencia, que se registrarán por lo establecido en los respectivos convenios.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá anticipar el monto del aporte financiero equivalente a un mes, sólo al inicio del proyecto previo requerimiento fundado del colaborador acreditado. En el caso de ser requerido, dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al colaborador acreditado, en un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 del D.S. N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez.



El monto de los aportes financieros del Estado se transferirá directamente a la cuenta corriente habilitada por el colaborador acreditado para la ejecución del respectivo proyecto, en conformidad a las obligaciones contenidas en los convenios suscritos con el Servicio y a los procedimientos específicos establecidos para las diferentes líneas de acción, los que se determinarán a través de la normativa técnica y administrativa impartida por este último.

El Servicio pagará mensualmente hasta la cobertura máxima establecida en los convenios. Una vez determinado el monto mensual a pagar por concepto de aportes financieros del Estado, el Servicio emitirá una liquidación de pago.

Para efectos del pago de un determinado proyecto, los colaboradores acreditados deberán informar los ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes, y la población atendida mensualmente. La entrega de la información deberá realizarse digitalmente.

Los destinatarios de los aportes financieros del Estado acreditarán mensualmente el monto de los aportes financieros del Estado percibidos mediante la emisión de un comprobante de ingreso, cuyo original deberá ser remitido a la Dirección Regional respectiva del Servicio.

No procederá el otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 18 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

SÉPTIMA: De las principales obligaciones del colaborador acreditado.

Durante la ejecución del proyecto, el colaborador se compromete a cumplir especialmente las siguientes obligaciones:

- 1) Atender a un niño, niña o adolescente, por derivación del Tribunal de Familia respectivo, que es el órgano judicial competente para conocer de las medidas proteccionales a que se refieren las letras c) y d) del artículo 71 y artículo 80 bis, ambos de la ley N° 19.968; y por derivación de Oficinas Locales de la Niñez respectivas (en la medida que dichos organismos se encuentren implementados). Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad del Director Regional del Servicio, para asignar cupos en proyectos de programas de Protección Especializada, conforme al artículo 19 de la Ley N°21.302.
Los ingresos por derivación del Ministerio Público o Fiscalía, sólo procederán en la medida que dicho organismo remita los antecedentes al Tribunal de Familia respectivo, a fin de que éste último dicte la resolución correspondiente, por cuanto, es el órgano judicial competente para conocer de las medidas proteccionales a que se refieren las letras c) y d) del artículo 71 y artículo 80 bis, ambos de la ley N° 19.968.
- 2) Los directores o responsables de los proyectos de protección especializada y los profesionales que de atención directa a los niños, niñas y adolescentes en alguna de las líneas de acción señaladas por la ley N°20.032, que tengan conocimiento de una situación de vulneración a los derechos de algunos de ellos, que fuere constitutiva de delito, deberán denunciar de inmediato esta situación a las autoridades competentes, según lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Procesal Penal. En estos casos, así como en aquellas situaciones que, no siendo constitutivas de delito, vulneren sus derechos, los directores o responsables de los proyectos respectivos deberán solicitar al tribunal competente la adopción de medidas de protección a favor del niño, niña o adolescente víctima, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ocurrencia del o los hechos respectivos.

El incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos precedentes, además de las sanciones penales que correspondan, constituyen una falta grave sancionada de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica. Cualquier entorpecimiento o retardo injustificado que impida el libre acceso de los profesionales, públicos o privados, que ejerzan la defensa jurídica del niño, niña o adolescente, con el fin de tener, en cualquier momento, comunicación personal, directa y reservada con aquéllos, independientemente de que cuenten con mandato judicial expreso o actúen como agentes oficiosos, será sancionado como falta grave de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 referido precedentemente.

- 3) Efectuar una rigurosa selección de personal, mediante la aplicación de tests psicológicos y estudio de sus antecedentes personales y laborales, con el fin de asegurar la competencia para la función a desempeñar y de descartar características o patologías que puedan constituir riesgo para los beneficiarios o las beneficiarias atendidos. Asimismo, deberá ejecutar un riguroso proceso de inducción inicial a todo el personal en materias referidas al respeto estricto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
- 4) Velar porque las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes demuestren idoneidad para el trato con ellos y, en especial que no hayan sido condenadas, se encuentren actualmente procesadas, ni se haya formalizado una investigación en su contra por crimen o simple delito, que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos. Para tal efecto, será su obligación solicitar a los postulantes que intervendrán en los proyectos, el certificado de antecedentes para fines especiales - con una antigüedad no superior a 30 días desde que comiencen a prestar atención a niños, niñas o adolescentes - a que se refiere el artículo 12 letra d) del decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, sobre prontuarios penales y certificados de antecedentes y a consultar al Registro previsto en el artículo 6° bis del decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro Nacional de Condenas, - al momento de la selección del personal y mantener con la debida periodicidad control sobre la mantención de esta circunstancia. Semestralmente, el organismo colaborador acreditado deberá consultar el registro previsto en el artículo 6 bis del decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, respecto de las personas que, en cualquier forma, les presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes.
Al efecto, deberá requerir a los interesados una declaración jurada simple que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos. Deberá solicitar antes de efectuar la contratación a las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes, información acerca de si el postulante se encuentra afecto a la inhabilitación prevista en el artículo 39 bis del Código Penal, consultando, a este respecto, la sección del Registro de Condenas denominada "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad" (artículo 39 bis del Código Penal). Asimismo, deberán solicitarles semestralmente, la presentación de un certificado de antecedentes para fines especiales, con el objeto de llevar, con la periodicidad de 6 meses, control sobre la mantención de las circunstancias descritas precedentemente. Con igual periodicidad, deberá requerir a los interesados, una declaración jurada simple, que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito, que por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos.

Asimismo, el colaborador no podrá contratar a personas que presten servicios en labores de atención o trato directo de niños, niñas y adolescentes en este proyecto, que tuvieren dependencia grave de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol. De conformidad con lo anterior, el colaborador deberá requerir a los interesados, una declaración jurada simple, en la que se exprese tal circunstancia, debiendo en caso de que esté sometido a tratamiento, acompañar la certificación médica correspondiente.

- 5) Destinar los aportes financieros que transfiere el Servicio, al cumplimiento de los fines de protección especializada, pudiendo destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo al cumplimiento de dichos fines.
La supervisión financiera y la fiscalización del gasto, se orientará a verificar el buen uso de los recursos transferidos.
- 6) Proporcionar la información técnica y financiera requerida por el Servicio, para la realización de la supervisión y fiscalización de las acciones relacionadas con los niños, niñas o adolescentes, conforme a la normativa que regula las acciones del Servicio en esta materia.
- 7) Rendir cuenta mensualmente, conforme a las normas e instrucciones sobre rendición de cuentas de fondos transferidos en virtud de la Ley N° 20.032, contenidas en dicha normativa, en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, y en las resoluciones exentas N°s. 208, de 2022, y 264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o aquella que la modifique o reemplace, en todo lo que no se oponga a las disposiciones antes señalada.

El colaborador acreditado no podrá recibir nuevos aportes financieros del Estado mientras no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los montos transferidos, y deberá restituir los respectivos fondos cuando aquella no se ajuste a los objetivos de los proyectos, salvo lo dispuesto en el artículo 18 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

- 8) Conservar la documentación constitutiva de la rendición de cuentas en el mismo orden del registro de ingresos y egresos, y mantenerla permanentemente a disposición de los supervisores del Servicio, de la Subsecretaría de la Niñez y de la Contraloría General de la República.
- 9) Acreditar mensualmente el monto del aporte financiero percibido mediante la emisión de un comprobante de ingreso cuyo original deberá ser remitido a la Dirección Regional respectiva del Servicio. Los colaboradores acreditados estarán obligados a llevar un registro de ingresos y egresos de los montos de los aportes financieros recibidos e informar sobre la aplicación de los mismos. En el registro antes señalado se deberán consignar, en orden cronológico, el origen y monto detallado de los aportes financieros recibidos, el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que registren los pagos realizados cuando correspondan; y el saldo disponible. Asimismo, deberán remitir al Servicio un informe mensual, el que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados, el detalle de estos, y el saldo disponible para el mes siguiente. El Servicio determinará la forma y contenidos específicos del informe mensual.



El colaborador acreditado deberá presentar el informe mensual dentro de los primeros 5 días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, ante la Dirección Regional respectiva, a fin de dar cumplimiento a la obligación de presentar la rendición de cuentas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

- 10) Reintegrar a la cuenta corriente del proyecto, los aportes financieros del Estado en los casos en que el colaborador acreditado los destine a fines distintos a los contemplados en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, no cumpla con los objetivos del proyecto, no presente la documentación original de respaldo que acredite el gasto en la ejecución del proyecto o mantenga saldos no rendidos, observados y/o rechazados, respecto de los recursos transferidos para el respectivo proyecto. En el caso de que el colaborador acreditado se encuentre en la obligación de restituir los aportes financieros del Estado, deberá efectuar el reintegro dentro del plazo máximo de 60 días hábiles contado desde el término del proyecto.

Por otra parte, en caso de que al término de un proyecto resultaren excedentes o saldos de aportes financieros no utilizados al término financiero de un proyecto, éstos deberán ser restituidos por el colaborador acreditado en una sola cuota durante el mes siguiente a la determinación de la existencia de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa N°04, Partida 21, Capítulo 11, Programa 01, del presupuesto identificado para este Servicio para el año 2025, en caso de que al término de un proyecto resultaren excedentes o saldos no utilizados, el colaborador acreditado podrá hacer uso de dichos fondos en otros proyectos bajo su administración, con el objeto de mejorar la calidad de la atención brindada a los niños, niñas y adolescentes en dichos proyectos. En caso de no ser utilizados dichos recursos en otros proyectos, deberán ser reintegrados al Servicio. El traspaso de fondos públicos entre proyectos de un mismo colaborador se realizará con la previa autorización del Jefe Superior del Servicio mediante resolución exenta y se informará bimensualmente a la Dirección de Presupuestos, detallando los montos traspasados por proyecto. Se excluyen de estos casos los fondos que hayan quedado excedentes derivados de la ejecución de proyectos de emergencia.

La facultad señalada en el párrafo precedente permanecerá vigente en la medida que se contemple en las leyes de presupuestos de cada año.

- 11) Hacer devolución de los bienes muebles que se adquirieron con los aportes financieros del Estado transferidos por el Servicio, para el cumplimiento del respectivo proyecto, al término de la ejecución de éste, a fin que el Servicio, conforme a criterios técnicos, resuelva sobre su posterior destinación.

Para estos efectos, deberá darse cumplimiento a la resolución exenta N°309, de 24 de marzo de 2023, de la Dirección Nacional de este Servicio, que aprueba el Instructivo de registro, control, traspaso y baja de bienes inventariables de los colaboradores acreditados, así como, cualquier modificación o nueva regulación en torno a estas materias y toda instrucción complementaria que en el Servicio se disponga.

- 12) Dejar claramente establecido que se trata de un proyecto financiado con aportes financieros del Estado transferidos por el Servicio, en todas las actividades que desarrolle e incorporar la imagen corporativa del Servicio en todo el material gráfico que edite, e incluir en los establecimientos o centros donde funciona el proyecto, la señalética que se describe en el

“Manual de Normas Gráficas señalética de instituciones acreditadas”, disponible en la página Web del Servicio con posibilidad de poner el nombre del proyecto “de fantasía”.

- 13) Mantener publicada y actualizada en su respectivo sitio electrónico institucional, la información señalada en el artículo 15 de la ley N°20.032 y en el inciso penúltimo del artículo 25 de la ley N°21.722. Asimismo, deberá mantener actualizada la información prevista en la ley N°19.862, que establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y su Reglamento, contenido en el decreto supremo N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
- 14) Informar mensualmente de la atención brindada, para efectos del pago, según las orientaciones recibidas desde el Servicio.
- 15) Llevar un registro general, permanentemente actualizado, de las derivaciones realizadas, por un lado, por las Oficinas Locales de la Niñez y, por el otro, por los tribunales competentes; de la fecha de recepción de las derivaciones; de la o las personas responsables de asignar los casos a los profesionales competentes; de la fecha en que se realizó tal asignación y los profesionales asignados a cada caso; de la fecha de inicio de la atención al niño, niña o adolescente y a su familia; del número y fecha de las intervenciones realizadas y de las personas a quienes ellas estuvieron destinadas; del número de la carpeta del caso de cada niño, niña o adolescente atendido, la que deberá encontrarse siempre actualizada, y los demás contenidos que determine el reglamento respectivo. Este registro, así como la carpeta individual de los niños, niñas y adolescentes atendidos, será de libre acceso para los fiscalizadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la Dirección Nacional, las direcciones regionales y los supervisores y fiscalizadores del Servicio; para la Defensoría de los Derechos de la Niñez y para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los jueces de familia, los abogados patrocinantes de los niños, niñas y adolescentes y sus curadores ad litem, en las causas que tramiten respecto de los niños, niñas y adolescentes que representan, tendrán siempre acceso al registro y a las carpetas individuales antes mencionadas, pudiendo solicitar su envío al tribunal. Todas las personas que, de acuerdo con los incisos precedentes, accedan a la información en ellos referida, quedarán sujetos al deber de reserva y confidencialidad establecido en el inciso segundo del artículo 33 la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, sancionándose su infracción del modo prescrito en el inciso cuarto de dicha norma. En el caso de los jueces de familia, éstos se registrarán de conformidad con las normas de reserva establecidas en el artículo 15 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia. El incumplimiento de los deberes de registro y actualización, así como cualquier entorpecimiento o retardo en el acceso a ellos a las personas que tienen derecho a ello, será sancionado como falta grave de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.
- 16) Operar y mantener actualizada en forma permanente, según las instrucciones y condiciones de uso que imparta el Servicio sobre la materia, toda la información requerida por el Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo de Servicio previsto en la ley N°21.302, el cual estará disponible desde el momento de inicio de los proyectos, a través del sitio web sis.mejorninez.cl. El colaborador acreditado será responsable de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que proporcione. La información contenida en el referido sistema será de propiedad exclusiva del Servicio.



- 17) Cumplir las normas e instrucciones generales y particulares que imparta el Servicio, de conformidad a la normativa vigente. Asimismo, deberán proporcionar la información que el Servicio requiera, ajustándose y colaborando con su supervisión y fiscalización técnica y financiera.

El no cumplimiento de lo dispuesto dará lugar a las sanciones consagradas en el artículo 9 bis y 37 de la ley N°20.032.

- 18) Velar por el correcto uso de los aportes financieros, procurando que esta no sea objeto de gravamen, embargo, condición o cualquier otra limitación que afecte o limite su uso o destino, debiendo, en caso de decretarse embargo u otra limitación cualquiera sea su origen, informar dentro de las 48 horas siguientes a la Dirección Regional del lugar donde se ejecuta el proyecto afectado. En dicha situación, el Servicio evaluará técnica y financieramente la procedencia del gasto que originó la afectación de la subvención pudiendo exigir la restitución de los recursos, si de los antecedentes aparece que no se ha ajustado a los objetivos del proyecto.
- 19) Destinar los aportes financieros del Estado en los contratos de arrendamiento que celebre para la ejecución del proyecto respectivo, exclusivamente en aquellas prestaciones que, con arreglo a las normas contenidas en el Código Civil, sean de cargo del arrendatario, estas son las “reparaciones locativas”, previstas en el artículo 1940 del citado cuerpo legal, salvo autorización previa del Servicio.
- 20) Dar cumplimiento a las observaciones emanadas del proceso de evaluación ex ante de la propuesta adjudicada, por parte de la Comisión de Evaluación, que serán debidamente informadas por la Dirección Regional de la Región respectiva; las que serán objeto de las respectivas supervisiones técnicas o financieras, según corresponda, que se practiquen en esta Dirección Regional; con el objeto de que este Servicio vele para que la acción desarrollada por sus colaboradores acreditados, respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y se ajuste a lo dispuesto en la ley N° 20.032 y en las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan.
- 21) Dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución exenta N° 155, de 2022, modificada por la resolución exenta N°307, de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio, que aprueba procedimiento ante hechos eventualmente constitutivos de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran atendidos en colaboradores acreditados del Servicio nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga respecto a los flujos e información a entregar ante estos hechos
- 22) Asegurar, los derechos laborales y el cumplimiento de las normas laborales y previsionales, respecto de los trabajadores que laboran en el proyecto, en el marco de la relación contractual que mantienen.
- 23) Utilizar la información proporcionada por el Servicio, sólo para los efectos de dar cumplimiento a los fines propios de este convenio, quedando prohibido todo uso distinto del señalado. En dicho entendido, el colaborador acreditado, deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes o información que el Servicio le proporcione con motivo del presente convenio, no pudiendo hacer uso de éstos para fines ajenos al mismo, y en consecuencia, no podrá, a cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder,

copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del convenio, como después de su término. Esta prohibición afecta al colaborador acreditado, al personal que labora en distintas calidades jurídicas, que se encuentre ligado al convenio, en todas sus etapas, incluso después de la expiración del mismo. El Servicio quedará liberado de toda responsabilidad por el uso indebido que el colaborador acreditado, pueda dar a la información, reservándose el derecho a ejercer todas las acciones legales tendientes a demandar el reembolso de las sumas a las que eventualmente sea obligado a pagar como consecuencia de lo anterior, más la indemnización de los perjuicios que se hubieren ocasionado.

- 24) Dar cumplimiento a la resolución exenta N° 149, de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio, que aprueba el procedimiento ante el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio o por los colaboradores acreditados, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga respecto a los procedimientos e información a entregar ante este hecho.
- 25) Proporcionar, a requerimiento del Servicio, y dentro del plazo que se le fije para ello, todas las copias digitalizadas, o en caso que no fuere posible, de todas las fotocopias legibles de la información que debe ingresarse en el Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo de Mejor Niñez, disponible a través del sitio web www.sis.mejorninez.cl, tales como información del proyecto, de los niños, niñas y adolescentes atendidos, de la gestión comunitaria - intersectorial, del funcionamiento del proyecto y de los aspectos administrativos, financieros y contables del mismo, que le han sido requeridos a este Servicio, en el contexto de la tramitación de una solicitud de acceso a la información, regida por la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, debiendo proceder a entregar dichos antecedentes al funcionario dependiente de esta Institución, que lo requiera por cualquier medio idóneo. En el caso de que todo o parte de dicha documentación ya no exista en poder del organismo colaborador —por expurgación autorizada por la Contraloría General de la República o por otro motivo calificado—, deberá informar dicha circunstancia fundadamente y por escrito, dentro de mismo plazo a quien lo requirió. El Servicio deberá adoptar todas las medidas de resguardo respecto de los datos personales y sensibles que contenga dicha información, de conformidad a la normativa vigente, procediendo previamente a su entrega, al tarjado pertinente.
- 26) Todo directivo, profesional y persona que se desempeñe en organismos colaboradores deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular.
- 27) Velar por el trato digno evitando la discriminación y la estigmatización de los sujetos de atención y de su familia. Deberán recibir en todo momento y en todo medio el trato digno que corresponda a toda persona humana. Particular cuidado se deberá tener en las medidas, informes o resoluciones que produzcan efecto en las decisiones de separación familiar.
- 28) Informar y tener en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente respecto a los procesos de intervención que le atañen, en función de su edad y madurez.
- 29) Dar cumplimiento al procedimiento, aprobado a través de la resolución exenta N° 619, de 2022, de este Servicio, o toda otra, que la modifique o la reemplace, que regula la forma de cumplir por parte de los colaboradores acreditados con la obligación establecida en el artículo 15 de la ley N° 20.032 y el artículo 20 del decreto supremo N° 20, de 2021, del



Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el reglamento sobre normas para la operación y adecuado funcionamiento de los registros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

- 30) Dar cumplimiento a los estándares de los programas de las líneas de acción contempladas en el artículo 18 de la ley N° 21.302, los que consisten en las condiciones mínimas y comunes que deben ser consideradas por el Servicio en el diseño de la oferta programática de protección especializada, así como en las bases administrativas y técnicas de las convocatorias que efectúe el Servicio para la ejecución de los programas de protección especializada, y en las obligaciones de los convenios suscritos con los colaboradores acreditados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.032.

Dichos estándares se contienen en el decreto supremo N°5, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez- que aprobó el reglamento que fija estándares para los programas del Servicio, los que se aplicarán a través de las siguientes dimensiones:

- a) Enfoques transversales.
- b) Organización interna.
- c) Gestión del equipo ejecutor.
- d) Gestión de la información.
- e) Ámbito de intervención.
- f) Ambientes adecuados para la niñez y adolescencia.
- g) Ámbito de participación.
- h) Medios y protocolos de actuación ante situaciones especiales.

Los medios e indicadores específicos para verificar el cumplimiento de los estándares se registrarán por lo establecido en dicho reglamento y conforme a lo previsto en la matriz para la determinación del cumplimiento de los estándares para la acreditación de colaboradores y para la ejecución de los programas de las líneas de acción del Servicio para el bienio 2022-2023, aprobada por resolución exenta N°18, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez o aquella que la modifique o reemplace.

En relación con el estándar “colaboración activa en la supervisión y asesoría”, los ejecutores deberán dar cuenta del cumplimiento de este estándar a través de informes periódicos que serán remitidos al Servicio, una vez al año en el mes de junio, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N°5, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez.

- 31) Imputar los pagos efectuados al fondo de cesantía, previsto en el artículo 13 de la ley N°19.728, (que estableció un seguro de desempleo o cesantía, en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo), efectuados con cargo a los aportes financieros que este Servicio le transfiere, a la indemnización por años de servicio que corresponde al trabajador desvinculado por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa. (Aplica Dictamen N°8.583, de 27 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República).
- 32) El colaborador acreditado deberá en su actuar, dar cumplimiento al principio de probidad en el ejercicio de las funciones que ejecuta. Todo directivo, profesional y persona que se desempeñe en la entidad colaboradora, deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, N°5, de la ley N°20.032.

OCTAVA: Del personal.



El personal que los colaboradores acreditados contraten para la ejecución de los proyectos no tendrá relación laboral alguna con el Servicio, sino que exclusivamente con dichos colaboradores, siendo responsabilidad de estos el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

El Servicio no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus trabajadores, sin perjuicio de la supervisión del gasto y de la calificación técnica de su personal comprometida en el respectivo proyecto.

El colaborador deberá informar a la Dirección Regional respectiva, cualquier modificación en la dotación y configuración de los equipos profesionales del proyecto, de tal forma que si el equipo ejecutor a cargo abandona o cesa sus funciones por cualquier causa, éstos deberán ser reemplazados por personal que cumpla con los mismos perfiles que el colaborador se comprometió en su formulario de presentación de proyectos y sus anexos, por lo tanto, a fin de salvaguardar la equivalencia curricular, deberá remitir los antecedentes del nuevo personal a contratar, pudiendo la Dirección Regional, objetarlo si no se ajusta al perfil comprometido por el colaborador, en el proyecto adjudicado y convenido.

Las personas jurídicas que se desempeñen como organismos colaboradores del Estado serán civilmente responsables por los daños, judicialmente determinados, que se hayan ocasionado a raíz de vulneraciones graves de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes causados tanto por hechos propios como de sus dependientes, salvo que pruebe haber empleado esmerada diligencia para evitarlas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil que por los mismos hechos pueda corresponderle a la persona natural que ejecutó los hechos.

Los trabajadores de los colaboradores acreditados deberán velar por el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 54 de la Ley N°21.302, esto es:

- 1.- El colaborador deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio de sus funciones.
- 2.- El personal deberá actuar conforme a los objetivos y principios establecidos en la ley, y tratándose del personal de la Administración del Estado, su incumplimiento será considerado como infracción grave al principio de probidad administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, número 8, de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
- 3.- El personal que tenga trato directo con niños, niñas y adolescentes, deberá tener una salud mental y física comprobable compatible con el cargo, y las cualificaciones técnicas y/o profesionales necesarias para un correcto ejercicio del mismo. En razón de lo anterior, el personal deberá someterse cada dos años a una evaluación de salud física y mental.

NOVENA: Del término unilateral y modificaciones de convenio.

El Servicio estará facultado, según los artículos 37 de la ley N° 20.032 y 41 de la ley N° 21.302, para poner término anticipado al presente convenio, dando el aviso correspondiente al colaborador acreditado con 60 días hábiles, de anticipación, o modificarlo, en cualquiera de las siguientes situaciones, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena de este instrumento:



- a) Cuando los objetivos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado acordado como mínimamente satisfactorio, o cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes no estén siendo debidamente respetados.
- b) Cuando las instrucciones impartidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley N° 20.032, no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el Servicio.
- c) Cuando el personal de los colaboradores acreditados que contraten para la ejecución del respectivo convenio figure en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad o en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar establecido en la ley N° 20.066 o haya sido condenado por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes.

El término anticipado de los convenios será obligatorio si durante su ejecución, se producen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de alguno de los niños, niñas o adolescentes, atribuibles a la responsabilidad del organismo colaborador en los términos establecidos en el número 6) del artículo 2 de la Ley N° 20.032, conforme a lo determinado en una sentencia judicial.

En caso de incurrir en infracciones graves, se deberá aplicar el término anticipado y unilateral de los convenios que correspondan, en los casos contemplados en los ordinales ii, iii y iv del inciso quinto del artículo 41 de la ley N° 21.302.

De igual manera, se podrán producir modificaciones al convenio como resultado de las observaciones de la Evaluación de Desempeño, bajo las mismas condiciones descritas anteriormente.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero de esta cláusula, la dirección regional respectiva, en el ejercicio de sus facultades propias, podrá poner término unilateral de los convenios, mediante resolución fundada, atendidos graves incumplimientos imputables al colaborador, en plazos inferiores a los 60 días, para lo cual deberá contar con un informe técnico y/o financiero de dicha instancia regional, el que deberá dar cuenta fundadamente de los hechos en que se sustenta la decisión de término, constitutivos de fuerza mayor - que resultan atentarios en contra de la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendiéndose como el diagnóstico clínico, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones, que debe garantizar este Servicio, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 21.302, y en contra de la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en la ley N° 21.430, constando la fecha a contar de la cual se hará efectivo el término, debiendo notificar el acto administrativo que disponga el término del convenio respectivo, al colaborador, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.880.

En estos y todos aquellos casos en que sea procedente, los colaboradores podrán reclamar de las resoluciones del Servicio, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880.

Asimismo, si el colaborador acreditado le comunica a este Servicio su intención de no continuar con la ejecución del proyecto antes de su fecha de término, por cuanto existen hechos que hacen imposible llevar a buen término su ejecución, se obliga a notificar al Servicio, con el objeto de que sea éste quien adopte la decisión de poner término o no al convenio, por escrito mediante carta dirigida al Director Nacional o Director/a Regional, con, a lo menos, 60 días hábiles de anticipación, debiendo lograr la ubicación de los niños y adolescentes en otros proyectos de similares características, conforme al plan de intervención individual (PII) respetando la zona geográfica de procedencia de los/as niños y adolescentes atendidos.



Las referidas modificaciones y términos de convenio deberán aprobarse por acto administrativo totalmente tramitado, (aplica dictamen N° 8.501, de 2019, de la Contraloría General de la República).

DÉCIMA: De las modificaciones y términos bilaterales.

Las partes comparecientes podrán modificar, de común acuerdo el proyecto, en lo que diga relación con los elementos de carácter accidental que forman parte de los mismos. Se debe dejar establecido que los elementos de carácter esencial de los convenios, tales como el plazo de duración, la focalización territorial y las plazas convenidas, no podrán modificarse bilateralmente, sino que deberá convocarse a un nuevo proceso licitatorio.

Sin embargo, podrán modificarse las plazas, siempre que se configure una situación de fuerza mayor, lo que deberá ser debidamente fundado por la respectiva Dirección Regional. Asimismo, dándose el supuesto recién señalado, la focalización territorial podrá ser modificada, en la medida que no se afecte la atención de los niños, niñas y adolescentes y no se incrementen los montos por beneficiario que el programa respectivo se encontraba percibiendo, especialmente en lo que refiere al factor lugar, todo ello sujeto a la competencia territorial del colaborador acreditado ejecutante.

A su vez, las partes comparecientes podrán poner término a este convenio, de común acuerdo, de manera fundada, con un plazo mínimo de anticipación de 30 días hábiles a su respectivo término, sin perjuicio que pueda acordarse entre las partes, un plazo inferior, siempre y cuando no se funde en situaciones de vulneraciones de los derechos de los niños niñas y adolescentes.

Las referidas modificaciones y términos de convenio deberán aprobarse por acto administrativo totalmente tramitado, (aplica dictamen N° 8.501, de 2019, de la Contraloría General de la República).

DÉCIMA PRIMERA: De la duración, vigencia y prórroga del convenio.

El convenio suscrito entre el Servicio y el colaborador acreditado adjudicatario comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de la total tramitación de la resolución que lo apruebe, en la medida que se encuentre totalmente tramitada la resolución que lo apruebe. El período máximo de ejecución del proyecto será de **3 años**.

Para efectos de la total tramitación de la resolución que apruebe el convenio respectivo, el colaborador acepta que la notificación de la misma se realice al correo electrónico que haya indicado en el anexo N°2 "Formulario de presentación de proyectos", en el recuadro que se consigna en el párrafo III "Antecedentes del Colaborador Acreditado" del formulario, conforme a lo señalado en el artículo 6: "Notificaciones, plazos y calendario de la licitación".

La vigencia del convenio debe extenderse hasta la aprobación de la rendición de cuentas o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, (aplica dictamen N° 92.578, de 2016, de la Contraloría General de la República).

La obligación de restituir los saldos, no ejecutados, no rendidos u observados, deberá cumplirse dentro de los plazos señalados en el artículo 26 de la ley N°21.722, en los términos señalados en el numeral 10 de la cláusula séptima, correspondiéndole a la autoridad ejercer todas las acciones que resulten necesarias al efecto, (aplica el dictamen N° 43.604, de 2015, de la Contraloría General de la República).

El Servicio podrá de manera excepcional prorrogar sólo por una vez los convenios sin necesidad de un nuevo llamado a concurso, si las evaluaciones de avance y resultados se consideran positivas, lo que se aprobará mediante el acto administrativo correspondiente debidamente fundado. Lo anterior, siempre y cuando al colaborador no le hayan sido aplicadas algunas de las sanciones establecidas en el artículo 41 de la ley N° 21.302, en los últimos doce meses, y no existan antecedentes fundados contra dicho colaborador acreditado o alguno de sus fundadores, directivos



o trabajadores por algún ilícito de índole civil, penal o administrativo que constituyan vulneración de derechos contra los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, lo que será evaluado por este Servicio.

DÉCIMA SEGUNDA: De la evaluación del proyecto:

Para este proyecto, las evaluaciones se efectuarán a los **meses 12, 24 y 33** de su ejecución.

Al momento de verificarse la evaluación del proyecto, el colaborador deberá presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1), emanado de la Dirección del Trabajo, que dé cuenta de la situación previsional de todos los trabajadores de la Institución, al último día del mes anterior a aquél en que se cumplen el período objeto de evaluación. El presente requisito sólo será exigible para las entidades privadas.

La evaluación de los convenios se dirigirá a verificar:

- 1) El respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias.
- 2) El cumplimiento de los objetivos del convenio.
- 3) El logro de los resultados esperados especificados en el respectivo convenio.
- 4) La calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, el estado de salud y de educación de los niños, niñas y adolescentes que en ella residan, y las condiciones físicas del centro de residencia, en su caso.
- 5) Los criterios empleados por el colaborador acreditado para decidir el ingreso y el egreso de niños, niñas o adolescentes.
- 6) La administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la subvención, de conformidad con los fines para los cuales aquella se haya otorgado, según la línea de acción subvencionable que corresponda.

Deberán considerarse como criterios objetivos, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato digno y respetuoso a los niños, niñas y adolescentes. El Servicio deberá verificar el cumplimiento del respeto a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de conformidad a las orientaciones técnicas que se dicten para cada modalidad de atención.

b) Revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar. El Servicio deberá verificar que cada modalidad de cuidado alternativo considere acciones destinadas a evitar el ingreso o prolongación de la estadía de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial o de acogimiento familiar, de conformidad a las orientaciones técnicas y procedimientos que el Servicio dicte al efecto, entre las cuales deberá considerarse una evaluación de la familia centrándose en sus recursos y necesidades de apoyo para el ejercicio de su rol.

c) Asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes. Se entenderá por asistencia oportuna para este efecto, el cumplimiento de las acciones definidas por el Servicio en las orientaciones técnicas orientadas al ejercicio del derecho a la salud y el derecho a la educación.

d) Idoneidad y pertinencia de la intervención ejecutada por los organismos colaboradores orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se entenderá como idónea y



pertinente la intervención cuando se haya dado cumplimiento a las acciones definidas por el Servicio en sus orientaciones técnicas, atendiendo a lo menos a la edad del niño, niña y adolescente y su grado de desarrollo, los procesos de intervención que se hubieren desarrollado en forma previa o paralelamente y el personal adecuado para su ejecución.

La evaluación deberá considerar y ponderar tanto las observaciones levantadas en los informes de visita realizadas por los jueces de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, así como aquellas emanadas de otros informes de organismos e instituciones que tengan por objeto la promoción, la protección o la defensa de los derechos de la niñez, y la opinión de los niños, niñas y adolescentes.

El procedimiento para la evaluación de desempeño anual de los convenios ejecutados por los colaboradores acreditados se regulará por lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 4748, de 31 de diciembre de 2019, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, que aprobó el "Procedimiento para la evaluación de desempeño anual de los convenios", o en las instrucciones dictadas por el Servicio que la modifiquen o reemplacen.

Como consecuencia de la evaluación, el Servicio podrá emitir instrucciones particulares a los colaboradores acreditados, indicando las deficiencias a corregir, con la finalidad de que el organismo adopte las medidas que correspondan dentro del plazo que determinará el Servicio, el que no podrá superar los noventa días, pudiendo prorrogarse por una sola vez y por el mismo plazo, en caso de existir razones fundadas. Excepcionalmente, y sólo en los casos en los que la naturaleza de las instrucciones que se ordena cumplir lo exija, podrá otorgarse fundadamente un plazo superior para su cumplimiento.

El retardo injustificado en el cumplimiento de las instrucciones será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 20.032.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la adopción por parte de este Servicio de las demás acciones que contemple la normativa vigente.

DÉCIMA TERCERA: Del destino de los aportes financieros:

El colaborador acreditado como cooperador del Estado en la prestación del servicio de protección especializada gestionará los aportes financieros de todo tipo para el desarrollo de su línea de acción. Estos aportes estarán afectos al cumplimiento de los fines de protección especializada y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, para estos efectos se entenderá que los aportes financieros recibidos se destinan a fines de protección especializada en el caso de las siguientes operaciones:

i) Pago de una remuneración a las personas naturales que ejerzan de forma efectiva funciones de administración superior que sean necesarias para la gestión del colaborador acreditado respecto del o los establecimientos de su dependencia, que se encuentren claramente precisadas en el contrato de trabajo respectivo. Dichas funciones no podrán ser delegadas, en todo o en parte, a personas jurídicas. Se entenderán comprendidas en este numeral las remuneraciones pagadas a las personas naturales que presten servicios en la administración superior del colaborador acreditado. Estas remuneraciones deberán ser pagadas en virtud de un contrato de trabajo que establezca la dedicación temporal y especifique las actividades a desarrollar, y deberán ser razonablemente



proporcionadas en consideración a la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada, a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de semejante naturaleza respecto de gestiones de protección especializada de similar entidad, y a los ingresos del colaborador acreditado por concepto de aportes financieros del Estado, con el objeto de asegurar los recursos para una adecuada prestación del servicio de protección especializada.

Sin perjuicio de lo anterior, los colaboradores acreditados deberán informar al Servicio cuál o cuáles de sus directores ejercerán las funciones indicadas en este numeral.

Por su parte, el Servicio, en uso de sus atribuciones, podrá solicitar información respecto de la acreditación del cumplimiento de dichas funciones.

ii) Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal que cumpla funciones de protección especializada y de operación para el cumplimiento de esas funciones en los establecimientos que pertenezcan al colaborador acreditado.

iii) Gastos de las dependencias de administración del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada.

iv) Costos de aquellos servicios que estén asociados al funcionamiento y administración del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada.

v) Adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos para el buen desarrollo de la línea de acción de protección especializada, así como recursos e insumos complementarios que sean útiles al proceso integral de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

vi) Inversión en activos no financieros necesarios para la prestación del servicio de protección especializada.

vii) Inversión en activos financieros de renta fija, siempre que los intereses o réditos sean utilizados para los fines de protección especializada dispuestos en este artículo y no se afecte de forma alguna la prestación de servicios de protección especializada.

viii) Gastos asociados a la mantención y reparación de los inmuebles y muebles a que se refieren los numerales anteriores.

ix) Pago de obligaciones garantizadas con hipotecas, contraídas con el solo propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funciona el establecimiento que entrega servicios de protección especializada de su dependencia.

x) Pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el de invertir el dinero de dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del programa de protección especializada del establecimiento respectivo. En caso de que el colaborador acreditado sea propietario de dicha infraestructura, tales créditos o mutuos podrán encontrarse garantizados mediante hipotecas.

Si dichas mejoras superan las 1.000 unidades tributarias mensuales se deberá consultar por escrito al Consejo de Expertos del artículo 9 de la ley N°21.302.

xi) Gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio de protección especializada del o los establecimientos donde se realicen estas prestaciones.

xii) Gastos consistentes con la línea o programa de protección especializada o los establecimientos donde se realicen estas prestaciones.

Las operaciones que se realicen en virtud de los numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi) del inciso segundo estarán sujetas a las siguientes restricciones:

a) No podrán realizarse con personas relacionadas con los colaboradores acreditados o representantes legales del establecimiento, salvo que se trate de personas jurídicas sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente servicios al o los establecimientos de protección especializada de dependencia del colaborador acreditado en materias técnico-pedagógicas, de capacitación y desarrollo de su proyecto educativo. El sostenedor deberá informar sobre dichas personas al Servicio.



b) Deberán realizarse de acuerdo a las condiciones de mercado para el tipo de operación de que se trate en el momento de celebrar el acto o contrato. Tratándose de operaciones a título oneroso, el precio de la transferencia no podrá ser superior a aquél que prevalece en el mercado. Se prohíbe a los directores o representantes legales de un colaborador acreditado realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- 1) Inducir a los administradores o a quienes ejerzan cargos análogos a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información.
- 2) Tomar en préstamo dinero o bienes de la entidad sostenedora o usar en provecho propio o a favor de personas relacionadas con ellos los bienes, servicios o créditos de la entidad colaboradora.
- 3) Usar en beneficio propio o de personas relacionadas a ellos las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo, en perjuicio de la entidad colaboradora.
- 4) En general, practicar actos contrarios a los estatutos o al fin de protección especializada del colaborador acreditado o usar su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para personas relacionadas con ellos, en perjuicio de la entidad colaboradora y su fin.

La resolución exenta N°264, de 2024, que instruye sobre el uso y el destino de los aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, en virtud de la ley N° 20.032, y procedimiento de rendición de cuentas ante el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, regula en específico algunos gastos por concepto de operaciones a las cuales se destinan los aportes financieros, pagos de obligaciones garantizadas con hipotecas, pagos de créditos bancarios, evaluaciones psico - laborales, bonos de colación y movilización, caja chica, entre otros, estableciendo exigencias para su procedencia o autorización.

DÉCIMA CUARTA: De la rendición de cuentas y el procedimiento de reintegro

En materia de rendición de cuentas regirá lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, lo establecido en la Ley N° 20.032 y en las Resoluciones Exentas N°s 208, de 2022, y N° 264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o aquellas que las modifiquen o reemplacen, en todo lo que no se opongan a las disposiciones antes señaladas.

La rendición de cuentas se realizará de manera digital a través del Sistema Nacional de Información de este Servicio (SINAREC), en el módulo rendición de cuentas, de conformidad a la autorización otorgada por la Contraloría General de la República a través de la resolución N°3647, de 2020, o mediante el Sistema Electrónico que pueda adoptar este Servicio conforme a la normativa vigente.

La rendición de cuentas es sobre los gastos realizados en los proyectos en forma posterior a la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio. En casos calificados por el Director Regional, fundamentados en razones de continuidad o buen servicio, podrá incluirse en la rendición de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación de la respectiva resolución.

El reintegro de los aportes financieros procederá en los casos en que el colaborador acreditado destine aquellos a fines distintos de los contemplados en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, no cumpla con los objetivos del proyecto, no presente la documentación original de respaldo que acredite el gasto en la ejecución del proyecto o mantenga saldos no rendidos, observados y/o rechazados respecto de los recursos transferidos para el respectivo proyecto.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo instruido en la resolución exenta N°264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o las instrucciones que la modifiquen o reemplacen, debiendo efectuarse el reintegro de los aportes financieros del Estado en el plazo señalado en la cláusula séptima, N°10 del presente convenio, a fin de dar cumplimiento al artículo 26 de la ley N°21.722 en



relación con el artículo 30 del decreto supremo N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez.

DÉCIMA QUINTA: De la supervisión y de la Auditoría de Gestión.

El Servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal, reglamentaria y normas técnicas determinadas conforme a ellas, respecto de la ejecución de los programas de protección especializada. La supervisión y fiscalización se hará, al menos, semestralmente respecto de todos los programas a lo largo del país, y tendrá como foco principal el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que sean sujetos de atención del Servicio, el respeto de sus derechos, la calidad y mejora continua de los programas de protección especializada, y la administración proba de los recursos públicos. Deberá contar con la opinión de los niños, niñas y adolescentes atendidos y sus familias y cuidadores. Los resultados de estas fiscalizaciones serán públicos, se comunicarán en lenguaje sencillo y en un formato accesible para cualquier persona.

El Servicio fiscalizará, especialmente:

- i. Que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren sujetos a cuidados alternativos, estén recibiendo cuidados adecuados y permanezcan desarrollándose en su entorno familiar, escolar y comunitario, salvo en aquellos casos en los que los tribunales competentes hagan una suspensión expresa y temporal respecto de su derecho de relación directa y regular con personas determinadas.
- ii. El cumplimiento de los principios, deberes y requisitos establecidos en esta ley, y de los estándares técnicos y de calidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el reglamento a que se refiere el artículo 3 ter de la ley N° 20.530, como condición para la no suspensión de las transferencias y/o de los convenios celebrados con terceros.
- iii. Los reclamos realizados por los niños, niñas y adolescentes atendidos, sus familiares o cuidadores, su naturaleza y gravedad, y la calidad, celeridad y eficiencia de la solución que fue entregada.
- iv. La cabal y oportuna reparación del daño y los perjuicios ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales estando a su cuidado, o con ocasión de las prestaciones realizadas, como condición ineludible para mantener su acreditación como colaborador acreditado.
- v. Que las medidas e intervenciones decretadas por los tribunales de familia se realicen exclusivamente en el plazo en que fueron dictadas para su realización.

En el ejercicio de esta función, el Servicio deberá realizar visitas inspectivas, sin previo aviso, con la periodicidad necesaria para abarcar a todos los colaboradores acreditados.

En los casos en que el Servicio ejecute la línea de acción de cuidados alternativos, por medio de terceros, el Servicio implementará semestralmente una auditoría de gestión e impacto con el fin de fiscalizar los programas ejecutados por colaboradores acreditados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24, inciso penúltimo, de la ley N°21.302.

DÉCIMA SEXTA: De la denuncia de hechos por vulneración de derechos.

Déjase establecido que cualquier obstaculización al ejercicio de su derecho al relacionamiento o comunicación familiar, educativa o comunitaria, así como cualquier amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas o adolescentes acogidos en cuidado alternativo de cualquier tipo, incluso cuando no sea constitutiva de falta o delito, podrá ser denunciada directamente por los afectados o por cualquier persona a su nombre ante las autoridades competentes. Constatados los hechos, el Director Nacional suspenderá el pago del aporte financiero del Estado correspondiente al



niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, en tanto la o las personas responsables de la afectación de ese derecho no sean removidas de sus cargos o no sean finiquitados sus servicios, según corresponda.

DÉCIMA SÉPTIMA: De las sanciones.

La realización, por parte de los colaboradores acreditados, de alguna de las conductas que se indican en el artículo 41 de la Ley N°21.302, serán sancionadas con amonestación escrita, multa, término anticipado, inhabilitación temporal y término de acreditación, según corresponda, para cuya aplicación, el Servicio se deberá sujetar al procedimiento previsto en el párrafo 7°, Título III.- De la Protección Especializada, de la ley referida.

DÉCIMO OCTAVA: De la garantía de anticipo

El colaborador acreditado para efectos de garantizar el anticipo solicitado en su propuesta técnica contenida en el Anexo N°2, al momento de suscribir el convenio, Certificado de Fianza 1°0F1EA8 pagadera a la vista nominativa N° de folio F0078802, emitido el 20 de noviembre de 2025 a favor del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, RUT N° 62.000.890-7, emitida por Pro Garantía S.A.G.R., documento pagadero a la vista e irrevocable, por un monto de \$21.207.382 CLP correspondiente al 100% de la cantidad solicitada por concepto de anticipo, y cuya vigencia se mantiene hasta el 30 de noviembre de 2026.

El presente anticipo corresponderá al equivalente de un mes del aporte financiero del Estado y se otorgará sólo al inicio del proyecto de acuerdo con lo solicitado por el colaborador acreditado. Dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al colaborador acreditado, en un máximo de seis (6) mensuales, iguales y consecutivas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 del D.S N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y familia – Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Hacienda.

El documento que garantice el anticipo sólo será devuelto al colaborador acreditado una vez que se haya pagado la totalidad del anticipo considerando la totalidad de los descuentos que correspondan.

Excepcionalmente, y por razones de buen servicio, los costos financieros en que incurra el colaborador adjudicado para obtener la emisión del instrumento de garantía, y se generen previo a la tramitación de la resolución que aprueba el convenio, podrán incluirse en la rendición de cuentas correspondiente, considerando lo dispuesto en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, el párrafo final del artículo 25, letra b) de la ley N°21.722, lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución Exenta N°30, de 2015 de la Contraloría General de la República y en los dictámenes N°78.106, y N°72.213, ambos del año 2011, del mismo Ente Contralor. Sin perjuicio de lo expuesto, los pagos de los aportes financieros del Estado estarán condicionados a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio.

DÉCIMO NOVENA: Limitación a la subcontratación.

Queda prohibida toda subcontratación.

Lo anterior, es sin perjuicio de los trabajadores que contrate el colaborador acreditado para la prestación de los servicios objeto del presente convenio, los cuales, no tendrán relación laboral alguna con este Servicio, siendo responsabilidad de dicho colaborador en su calidad de empleador, el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.



VIGESIMA: Prohibición de fraccionamiento.

De conformidad a la exigencia establecida el artículo 25 letra e) de la ley N°21.722, se adjunta al presente convenio, un anexo que contiene el listado de convenios suscritos por el colaborador acreditado y este Servicio que se encuentran vigentes.

VIGÉSIMA PRIMERA: Prórroga de la competencia.

Para todos los efectos legales que pudieran derivarse de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, prorrogando competencia y sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Ejemplares.

El presente convenio se extiende en tres ejemplares del mismo tenor, valor y fecha, quedando dos en poder del Servicio y el otro en poder de la Institución.

VIGÉSIMA TERCERA: Personerías.

La personería de doña **MARCELA GAETE REYES** para representar al Servicio, consta en Resolución N°RA215067/50/2023 de fecha 20 de enero de 2023, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que la nombra en cargo de Alta Dirección Pública de directora regional de la Región Metropolitana.

La personería de don **RAFAEL DE PUJADAS LIRA**, para representar al **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**, consta en acta de la sesión extraordinaria de directorio de IDECO, celebrada el 29 de abril del 2024, reducida a escritura pública con fecha 8 de mayo del 2024, ante don **SERGIO ARTURO MARTEL BECERRA**, notario titular de la vigésimo cuarta notaria de Santiago.

Marcela
Gaete Reyes

Firmado
digitalmente por
Marcela Gaete Reyes
Fecha: 2025.11.26
17:32:30 -03'00'

MARCELA GAETE REYES

**DIRECTORA REGIONAL DE LA
REGIÓN METROPOLITANA
SERVICIO NACIONAL DE
PROTECCIÓN
ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA**

RAFAEL DE
PUJADAS LIRA

Firmado digitalmente
por RAFAEL DE PUJADAS
LIRA
Fecha: 2025.11.26
17:17:24 -03'00'

**RAFAEL DE PUJADAS LIRA
REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO
IDECO MIGUEL DE PUJADAS
VERGARA**

Esta ficha acompaña a los antecedentes solicitados posterior a la adjudicación de los códigos publicados en el concurso público respectivo. Los antecedentes deben ser completados de acuerdo a la información de cada proyecto nuevo creado, o en su defecto respecto de alguna modificación de convenio por aumento o disminución de plazas, cambio de focalización, etc.

Se realiza una ficha por cada uno de los programas.

ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN

Número resolución	2550-2025	
Fecha resolución	27-11-2025	
Fecha inicio proyecto	01-12-2025	xx-xx-xxxx
Fecha fin proyecto	30-11-2028	xx-xx-xxxx
Primer día de no pago	01-12-2028	

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Tipo de resolución	Aprueba Convenio	Elegir del listado
Código proyecto nuevo	1133085	Código proyecto nuevo
Código precedente	No tiene	Código proyecto de origen
Código de licitación	1939	Código de licitación
N ° de concurso	L4_2025	

ANTECEDENTES DEL ORGANISMO COLABORADOR

Nombre institución	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO IDECO MIGUEL DE PUJADAS	Elegir de Lista
RUT institución	71.877.800-K	xx.xxx.xxx-x
Código institución	6897	
Tipo institución	Corporación	Elegir de Lista
Dirección	PRIMERA TRANSVERSAL 2630	Calle más número
Comuna	MAIPU	Nombre comuna
Región	METROPOLITANA	Elegir de Lista
Teléfono	224196882	562-2-xxxxxxx
email	IDECO@CORPORACIONIDECO.CL;	xxx@xx.com
Representante legal	RAFAEL DE PUJADAS LIRA	Nombre completo
RUT	15.318.566-2	xx.xxx.xxx-x

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Linea de Acción	Reparacion Ambulatoria	Elegir de Lista
Modalidad	PRM- Programa de Protección Especializada	Elegir de Lista
Nombre de proyecto	PRM - IDECO ALGARROBO	Modalidad - nombre
Dirección	VERONA N°1458 VILLA ITALIA	Calle más número
Comuna	CERRO NAVIA	Elegir de lista
Focalización	RENCA – CERRO NAVIA	Anexo1

Región	METROPOLITANA	Elegir de Lista
Teléfono (1)	56 9 7542 7712	562-2-xxxxxxx
email	IDECO@CORPORACIONIDECO.CL	xxx@xx.com
Nombre Director	PATRICIA XIMENA BRAVO SALAMANCA	Nombre completo
RUT	18.593.945-6	xx.xxx.xxx-x
Celular director	56 9 6726 5500	
Sexo que atiende	A	Elegir de Lista
Edad Mínima	0	
Edad Máxima	17	
Edad Máxima de Permanencia	18	

ANTECEDENTES PARA EL PAGO

Cuenta Corriente	04-00157-60	Cuenta Banco
Banco	Scotiabank.	Nombre Banco
Solicita Anticipo	SI	Elegir de Lista
Cobertura Convenio Vigente	100	N° de plazas convenidas
Aumento o Disminución de plazas convenidas		Elegir de la lista
Cantidad de aumento o disminución de plazas		N° de plazas
Total de cobertura con modificación		N° total de plazas
Fecha del inicio aumento de plazas		Fecha modificación
Factor Cobertura	0%	Elegir de Lista
Factor Lugar	0%	Calculo automático

PROFESIONAL QUE REALIZA FICHA DE DATOS BASICOS

Cargo	Analista Supervisor Administrativo y Financiero	
Nombre	Cristóbal Andrés Manríquez Marchese	
Mail	cmanriquez@servicioproteccion.gob.cl	xx@xx.com
Fecha de envío de IDECO	17-10-2025	XX-XX-XXXX

CERTIFICADO DE FIANZA

Ley Nº 20.179

PAGADERO A LA VISTA

NOMINATIVO / NO NEGOCIABLE / IRREVOCABLE

ProGarantía S.A.G.R. emite este certificado de conformidad a la Ley Nº 20.179, de 20 de Junio de 2007, constituyéndose en este acto en fiador del afianzado: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO COMUN IDECO MIGUEL DE PUJADAS VERGARA**, RUT: **71.877.800-K**, en beneficio del acreedor: **SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**, RUT: **62.000.890-7**.

Fianza con el objeto de garantizar las siguientes obligaciones entre el Afianzado y el Acreedor, por la cantidad de hasta: **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CHILENOS**.

Producto: **Anticipo de Fondo**

Obligación caucionada:

"PARA GARANTIZAR EL ADECUADO Y CORRECTO USO DEL ANTICIPO DEL CÓDIGO 1939 SEGÚN ADJUDICACIÓN EN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 00878/2025 CORRESPONDIENTE AL CUARTO CONCURSO PÚBLICO PARA COLABORADORES ACREDITADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"

PAGADERO A PRIMER REQUERIMIENTO.

Este certificado se emite en virtud del "Contrato de Garantía Recíproca" suscrito entre ProGarantía S.A.G.R. y el Afianzado y no goza del beneficio de excusión, en conformidad a lo establecido en la Ley N.º 20.179. El presente certificado cubre exclusivamente incumplimientos de la obligación caucionada ocurridos durante la vigencia de este certificado, a menos que se indique explícitamente lo contrario. El cobro de este certificado solo podrá ser realizado por el Acreedor hasta la fecha de vencimiento señalada, después de este plazo caducarán los derechos de este último. Este certificado no devenga intereses ni reajustes. El presente certificado de fianza no admite ninguna modificación a sus condiciones originales y garantiza exclusivamente la obligación caucionada indicada anteriormente.



ProGarantía S.A.G.R.



Firmado electrónicamente por:
ALEJANDRO ARRIAGADA ARANEDA
el 20-11-2025 a las 17:44
en SANTIAGO



Para validar este certificado:

1. Ingrese el RUT **71.877.800-K**, el folio **F0078802** y el código **1A0F1EA8** en <https://validacertificadoprogarantia.cl>.
2. Recibirá un correo desde validacertificado@progarantia.cl con la confirmación de la validación.